



**ELECCIONES EN HONDURAS:
¿Continuidad, cambio o ruptura
después del golpe de Estado?**

Gustavo Zelaya

Javier Suazo

Sergio Suazo Rubí

José Antonio Borjas M

Tegucigalpa, DC, marzo de 2013

© 2013 Friedrich-Ebert-Stiftung FES (Fundación Friedrich Ebert)
Dirección: Colonia Florencia Norte, calle atrás de CINSA, casa 211
Contiguo a la Comisión Nacional de Energía
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 22310009 y 0090 / Fax: (504) 22396436
E-mail: honduras@fesamericacentral.org
www.fesamericacentral.org

Autores: Gustavo Zelaya, Javier Suazo, José Antonio Borjas y Sergio Suazo Rubí.

La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores ni éstas comprometen a las instituciones en las que prestan sus servicios.
Se autoriza a citar o reproducir el contenido de esta publicación siempre y cuando se mencione la fuente y se remitan dos ejemplares a la FES.

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
I. El Contexto y los Antecedentes Inmediatos.....	6
1.1 Los elementos visibles del espacio histórico.....	7
1.2 Democracia y Neoliberalismo.....	9
1.3 El tránsito de la democracia a la corrupción.....	12
1.4 El golpe de Estado de 2009 o el atraco en grado superlativo.....	14
1.5 Las elecciones primarias.....	15
II. Desajuste Económico: una causa no visible para el relevo del Gobierno en el bipartidismo hondureño.....	17
2.1 Inestabilidad económica-financiera y autoritarismo democrático (1982-1989).....	18
2.2 El Ajuste Estructural: Punto de Quiebre de la Política Económica (1990-1993).....	20
2.3 Cambio de Rumbo, Vulnerabilidad Territorial y Social (1994-2002).....	21
2.4 Nuevo Ajuste Económico para la Condonación y Combate de la Pobreza (2002-2005).....	23
2.5 Gobierno del Poder Ciudadano y Antesala al Golpe de Estado (2006-2008).....	25
III Golpe de Estado: condicionante del nuevo proceso político en Honduras.....	27
3.1 El Sistema Político.....	29
3.2 El Poder.....	30
3.3 El bipartidismo.....	32
IV. La Economía y los Procesos Electorales Post Golpe.....	37
4.1 Factores explicativos del porqué el golpe de Estado.....	37
4.2 Los Principales efectos e impactos económicos del Golpe de Estado.....	40
4.3 El Humanismo Cristiano: ¿Continuidad o Ruptura del Golpe?.....	41
V Análisis de los Resultados Obtenidos en el Proceso de Elecciones Internas 2012.....	51
5.1 Resultados Electorales por Partido.....	52
5.2 Resultados Electorales en Nivel Presidencial.....	55
5.3 Resultados Electorales en el nivel Legislativo.....	56
5.4 Resultados Electorales en el Nivel Municipal.....	61
Una Hipótesis y Varias Razones sobre las Elecciones Generales 2013.....	62

INTRODUCCIÓN

Como se sabe, en nuestro país, los estudios sistemáticos sobre Procesos Electorales Generales e Internos y Primarios son muy pocos, y, los que se hacen, se limitan a mostrar la parte meramente estadística que, siendo importante, abstraen aquellos aspectos de la realidad que constituyen el contexto en el que tienen lugar.

Así, el análisis económico, histórico y político, quedan fuera y de esa manera, los estudios dejan de ser instrumentos útiles para los partidos y dirigentes políticos, para grupos de interés, movimientos sociales, para el mundo académico y para la sociedad en general.

La cultura cívica – en el sentido politológico de la expresión- también se nutre de análisis y estudios sobre la política y todo aquello que de ella se deriva, incluyendo la praxis de quienes se dedican a hacer política es decir, los políticos. Conscientes de ello, éste trabajo, impulsado desde la Fundación Friedrich Ebert, con el trabajo de un equipo de intelectuales e investigadores sociales hondureños, pretende ser una contribución al estudio de los Procesos Electorales Primarios e Internos como el que se desarrolló en 2012, desde una perspectiva multidisciplinaria.

Un estudio de ésta naturaleza, requiere de unos antecedentes que muestren la manera cómo y sobre qué bases se desarrollan los Procesos Electorales Primarios e Internos; por ello, la primera parte, está dedicada a contextualizar parte de la vida política, social y económica del país, resaltando en particular, los hechos políticos más importantes de los últimos treinta años.

Se analiza el origen de lo que se denomina *bipartidismo*, como expresión de una forma de organización del poder formal, en tanto que fachada de otros poderes devenidos en “colonizadores” del Estado, aglutinados en grupos económico-financieros que determinan en última instancia, la suerte de los más pobres.

Por otro lado, el estudio contiene un detallado análisis económico, respaldado por una sólida fuente de datos estadísticos de las principales instituciones tanto nacionales como de organismos internacionales sobre la materia. Tener presente el devenir económico del país, en medio de constantes crisis, agravadas por hechos como el golpe de Estado de 2009, resulta necesario para una mejor comprensión de las posibles salidas a las recurrentes crisis económicas.

En ese contexto, el estudio contiene el análisis de los resultados electorales de 2012, en los tres niveles electivos (Presidencial, Diputados y Alcaldes Municipales), de los resultados de las elecciones internas, la nueva composición de las fuerzas, de cómo podría estar conformado el nuevo Congreso Nacional y de las posibilidades que ideas como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tienen, dentro de una correlación de fuerzas en la que seguramente, ningún partido cuenta con una mayoría.

El estudio concluye con una hipótesis general sobre las elecciones de noviembre del año en curso, se abordan los requerimientos necesarios – en modo condicionante- para que un partido pueda alcanzar el poder, teniendo en cuenta factores como la dispersión del voto por el número de partidos que participarán en las mismas, los instrumentos que el partido en el poder tiene a sus disposición para condicionar las preferencias ciudadanas a su favor, hasta la necesidad de una propuesta alternativa que pueda ser de fácil comprensión por la población, y que lo demuestre en las urnas electorales.

Contrario a las voces apocalípticas que presagian que la única solución para la crisis económica, política y social que enfrenta el país es la profundización del modelo neoliberal, con sus devaluaciones aceleradas, rescates financieros, privatizaciones y venta del territorio nacional, mayores violaciones de los derechos humanos, más impunidad y corrupción, resurge la esperanza de una propuesta de desarrollo que tenga como fin último la reproducción de la vida humana sin más condiciones que las que impone el devenir histórico.

I. El Contexto y los Antecedentes Inmediatos

Es de conocimiento general que la existencia de la miseria, la corrupción, el desempleo, la precariedad en el trabajo, la violación de los derechos humanos, la inseguridad, el abuso y el despilfarro de la riqueza nacional, son momentos de la cotidianidad hondureña que tienen como fundamento unificador la impunidad. Es decir, además de vivir en situaciones de desigualdad y de exclusión generalizada, las y los hondureños se ven obligados a enfrentar un sistema judicial y de seguridad que niega sistemáticamente el acceso a la justicia y al debido proceso. Tal situación se agudiza mucho más cuando parece que los grupos tradicionales del poder económico nacional y extranjero y político, y otros que están emergiendo, establecen firmes relaciones con el crimen organizado para acrecentar riquezas y poderío y hacer mucho más efectiva la posibilidad de un Estado a su servicio.

Tal control del Estado ha sido fruto de un proceso que puede rastrearse con alguna claridad a partir del denominado tránsito a la democracia. Especialmente a partir de 1981 con el triunfo electoral de Roberto Suazo Córdova que lo convirtió en presidente constitucional de Honduras después de casi 18 años de presencia y firme intervención militar en el poder político. Desde ese momento de ascenso de un gobernante civil y en los siguientes treinta años la sociedad hondureña experimentó ciertos cambios: los vínculos sociales se hicieron más urbanos, aumentó la población, surgieron nuevos actores sociales, la ciudadanía amplió sus reclamos y sus intereses, el sistema económico se volvió más abierto y fue más penetrado por inversionistas extranjeros y las formas de la cultura nacional se hicieron más diversas

A raíz del golpe de estado contra el gobierno constitucional de José Manuel Zelaya Rosales, las dificultades arrastradas desde décadas atrás se mostraron con más claridad y su impacto en la población tomó ribetes criminales. La ilusión de la vida democrática se tornó en real y sangrienta tragedia hasta el grado de que, tal vez con excepción de Haití, en ninguna parte de América Latina la extravagancia, el despilfarro y la riqueza más escandalosa existe a la par de la miseria más terrible y se enfrentan tan duramente hasta el grado de atentar contra la existencia de la mayoría de los ciudadanos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2012, la pobreza en Honduras alcanzaba el 67% de la población, 857,667 hogares, casi cinco millones de personas, aunque algunos analistas consideran que la cifra es superior.

Y esto es tan palpable cuando vemos la forma de la concentración y distribución de la riqueza social, 200 millonarios, que representan el 0.000024% de la población, poseen el 76% de la riqueza nacional.¹De modo que en el recorrido del país durante las tres décadas de supuesta normalidad democrática podemos ver que el Estado en ningún momento ha representado los intereses de todos los hondureños.

Así, con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los problemas relacionados con la fragilidad del Estado no aparecieron de manera súbita como un fenómeno espontáneo y de corta duración; sólo irrumpieron de manera abierta y trágica y fueron más evidentes para una gran masa de la población. En cierta forma, con la ruptura constitucional, únicamente se rompió la delgadísima tela en la cual se expresaba la aparente “normalidad democrática”. En los años precedentes, la transición hacia la democracia participativa no se expresó como desarrollo nacional equitativo y como, consecuencia, el Estado hondureño no pudo levantar los intereses de la nación por sobre los intereses de grupos particulares. De hecho el Estado está al servicio de ciertos grupos político-económicos y de ninguna manera fue diseñado como un Estado Nacional encargado de regular las relaciones de todos los hondureños.

1.1 Los elementos visibles del espacio histórico

Un elemento que se mantiene en muchas etapas de la historia nacional es la persistencia de un proceso de edificación democrática muy inconsistente; tal cuestión se nota desde el momento mismo del movimiento independentista. Ese proceso ha experimentado varias fracturas en forma de golpes de Estado y ello ha postergado la posibilidad efectiva del desarrollo democrático. De alguna manera esas rupturas del orden constitucional han mostrado que existen conflictos entre los grupos de poder para imponer su preponderancia sobre el país entero; esos choques de intereses pueden rastrearse desde 1827 con el derrocamiento del Jefe de Estado de Honduras Dionisio de Herrera, pasando por el golpe de Estado al presidente liberal Ramón Villeda Morales y alcanzan su punto más crítico, más corrupto y más violento el 29 de junio de 2009. Es posible que este hecho sea la expresión completa del fracaso de los intentos democratizadores iniciados en 1980 con el traspaso del poder político de los militares a los civiles.

¹ VoeseSoberano.com.

Esas costumbres golpistas se observarían también en casi toda América Latina; aunque algunos mantuvieran un carácter progresista o represivo, en todos se mantendría la tendencia de permanecer en el poder directamente o a través de mandatarios civiles. Y en ciertos casos, como ocurrió con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, pudimos ver un evento que no se acoplaba a los modelos acostumbrados ya que utilizaron medios en apariencia legales, una terminología para encubrir el golpe y políticos civiles dispuestos a participar en la maniobra. Pero no les fue posible ocultar el hecho de que los ejecutores de la ruptura constitucional estaban defendiendo un grupo político-económico y aparecieron como sus representantes.

Es suficiente hojear las páginas de la prensa nacional publicada o escudriñar los videos de la televisión tradicional desde cuatro semanas antes del golpe de Estado y en los meses subsiguientes, para ver la composición social de las organizaciones y de los individuos que respaldaron y se pronunciaron a favor de la ruptura constitucional. En esta coyuntura, los integrantes del aparato represivo no sólo se exhibieron como una brutal fuerza restrictiva y autoritaria y en teoría como defensores de la soberanía nacional que estaba amenazada por potencias extranjeras y por lo que llamaron ideologías exóticas. Sino que se mostraron como los representantes de un aparato económico que tenían que mantener en su poder, como ser las empresas estatales, y muy favorecidos por ser destinatarios de una parte importante del presupuesto nacional.

Puede decirse que el intento de implementar maneras democráticas en la conducción del país no tuvo como fundamento ninguna convicción en los grupos políticos dominantes a favor de prácticas civilizadas para regular la actividad pública, tampoco fue resultado contundente de las luchas emprendidas por el movimiento popular, sino que obedeció a la necesidad de asegurar los intereses norteamericanos en la región y de frenar los movimientos revolucionarios en Centro América. La democracia, entonces, tomó la forma de contrainsurgencia en la región. En esa estrategia parecía que los militares regresaban a sus cuarteles y los civiles se hacían cargo del gobierno pero ambos grupos seguían subordinados a la política norteamericana de seguridad regional.

Uno de los efectos de esa transición democrática impuesta por intereses extra nacionales fue la existencia de un régimen político que parecía democrático, con gobiernos surgidos de elecciones y haciendo creer que el momento del voto era esencial en la vida pública. Pudo

verse también que el concepto de soberanía nacional empezaba a agrietarse ya que en la década comprendida entre 1980 a 1990 en Honduras existió presencia militar de varios países, hasta hacer del territorio nacional una especie de base militar desde donde se atacaba al gobierno de Nicaragua y se colaboraba de forma encubierta con la fuerza armada salvadoreña en su lucha por sostener el gobierno de ese país y por combatir los movimientos guerrilleros agrupados en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.

Para llevar a cabo tal tarea los gobiernos de esa década asumieron compromisos que los hicieron ser actores directos, conscientes, responsables, del secuestro, desaparición y asesinato de varios hondureños y extranjeros, de los cuales se exige justicia y reparación por el dolor y los daños provocados. Entonces, de república bananera el país se convirtió en un gigantesco portaviones norteamericano, en una plataforma de agresión contra cualquier movimiento liberador.²

1.2 Democracia y Neoliberalismo

Es primordial tomar en cuenta que una característica económica importante en esa década que inició en 1980, fue una profunda crisis que obligó a casi todas las economías de Latinoamérica a aplicar programas de estabilización económica y ajuste con fuerte acento en política monetarias, fiscales y cambiarias restrictivas. Los economistas de formación neoliberal aseguraban que con tales ajustes se lograría una mejor vinculación con el mercado mundial y, por ende, ello daría lugar a importantes crecimientos económicos y a una gradual reducción de la deuda externa. En Honduras, la concreción del modelo neoliberal iniciado con Roberto Suazo Córdova³, se dio con la ejecución del Programa de Ajuste Estructural (PAE) a comienzos en 1990, con el presidente Rafael Leonardo Callejas, que incluye ajustes a las tarifas de los servicios públicos, desregulación de la economía, incremento de los impuestos, recortes en el gasto corriente, y una prolongada devaluación, que inicia con el cambio del factor de valoración aduanera, valor que hasta la fecha se utiliza como referencia para el tipo de cambio de nuestra moneda con respecto al dólar.

² Ver para ampliación a Ventura Ramos “Honduras: Guerra y Anti-Nacionalidad”. Editorial Guaymuras, octubre de 1997.

³ Sobre el enfoque y las bases del modelo neoliberal en Honduras, véase a Alcides Hernández “El Neoliberalismo en Honduras”. Editorial Guaymuras, 1983.

Hasta ahora una cuestión resulta clara, ocho años de ajuste neoliberal han demostrado que la pura economía de mercado y el fomento exclusivo del sector privado exportador no conduce a la erradicación de la pobreza. Y en una perspectiva histórica, más de 100 años de modelo agro exportador sólo han dejado el enriquecimiento de una minoría (transnacionales y socios locales) y el empobrecimiento de la mayoría de los hondureños.

La puesta en marcha de los ajustes estructurales fue integrada con políticas públicas que trataban de hacer que los gobiernos también se interesaran por el respeto a los derechos humanos, la democracia y por la desmilitarización del país. Esto se intentó desarrollar en muchos países de la región.

El fin de la guerra fría y el estado de paz en el istmo centroamericano también tuvo efectos en Honduras. No sólo se realizaron una serie de ajustes estructurales a la sombra de las políticas neoliberales, sino que se fueron diseñando propuestas para generar mayor legitimidad política a los gobiernos y obtener un aspecto democrático, tolerante, respetuoso de los Derechos Humanos y con una política de desmilitarización del Estado. Todo ese programa económico y político para darle un talante cordial al régimen político quedó pendiente de realizar. Los distintos gobiernos decían que impulsaban procesos de modernización del Estado, del sistema de justicia, y, sobre todo, la desmilitarización de la sociedad. Sin embargo, el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue la prueba irrefutable de lo aparente que eran esos procesos modernizantes. No sólo evidenciaron su fracaso sino que mostraron que nunca fueron considerados como necesarios para adecentar la vida nacional y para romper con la impunidad.

Desde 1980 no ha cambiado la percepción de la Ciudadanía sobre la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los botines principales de los grupos de poder y forma parte de las negociaciones que se realizan entre las élites políticas y económicas que han gobernado y gobiernan el país. El Ministerio Público forma parte también de ese ambicionado tesoro. Aunque se haya intentado introducir procesos de selección de magistrados y fiscales más libres, transparentes y rigurosos, el resultado no ha variado en lo más mínimo. Todo ese sistema judicial sigue politizado y generando alto grado de desconfianza. Según Juan Almendáres, ex rector de la UNAH, la mora judicial es uno de los problemas más graves en Honduras ya que representa casi un 60%. “Esto significa que muchas personas no han sido

sentenciadas y tenemos alrededor de 12,000 personas privadas de libertad, decir que más de 6,000 personas no han sido sentenciadas, solo están en un proceso judicial y muchos de ellos son inocentes”⁴

Se esperaba que el proceso de desmilitarización también fuera importante en la construcción de una sociedad y un Estado más democrático y sustentado en leyes. Pero ha ocurrido algo similar al sistema de justicia. Tanto la policía preventiva como la de investigación se crearon conforme a esquemas militares y eso no se ha modificado. Entidades estratégicas como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la Marina Mercante, Política Migratoria y el Instituto Geográfico Nacional están dirigidos por militares en retiro y su nombramiento es “sugerido” por la cúpula castrense. El colocar a ciudadanos civiles en la Secretaría de Defensa y en la de Seguridad no es más que una formalidad, pero en los hechos el mando de las instituciones militares y policiales se rige bajo estrictas normas propias de organizaciones militares.

Esa presencia de jefes castrenses se magnifica mucho más al ver que en todo el poder ejecutivo y en cada Secretaría de Estado existe un oficial de alto rango que funge como enlace entre el poder civil y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Después del golpe de Estado se mantiene y profundiza la participación militar en ámbitos políticos y administrativos del gobierno, tienen presencia en campañas nacionales de vacunación, de control de incendios forestales, temas educativos y hasta en la promoción de los llamados valores cívicos, dejando de lado su función principal: la defensa de la soberanía nacional; pero también cercenando las competencias de las instituciones públicas y los recursos del presupuesto nacional.⁵

Si quedara alguna duda sobre esa permanente militarización de la sociedad sería importante tomar en cuenta lo que dice el artículo 272 de la Constitución de la República que hace de las Fuerzas Armadas una entidad omnipresente en las relaciones políticas que se establecen en el país y a la cual, legisladores y presidentes, se encargan de adular, de complacer y de fortalecer año a año sus peticiones presupuestarias.

⁴ Declaraciones de Juan Almeyda en prensa, diciembre de 2012.

⁵ Uno de los ejemplos es el control de los incendios por los militares, que le quitan anualmente más de 250 millones de recursos financieros al ICF.

“Las Fuerzas Armadas, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la Paz, el orden público y el imperio el Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en la Presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del Orden Público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas (Artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras).

La degradación a que el país ha sido sometido incide no sólo en asuntos burocráticos, militares, protocolares y económicos. También hay un fuerte efecto en la percepción ciudadana sobre la democracia y la participación electoral. En cada proceso eleccionario se ha registrado un aumento en el abstencionismo y si en las elecciones de 2005 se registraron niveles de abstención de un 45%, en las elecciones efectuadas en el año del golpe de Estado tal dato ni siquiera podría considerarse como importante por las circunstancias que rodearon tal proceso. Se hicieron bajo condiciones de represión, sin la presencia de observadores internacionales calificados, con el no reconocimiento de muchos países al gobierno golpista y sin las condiciones más elementales que garantizaran la honestidad, legalidad y transparencia de las elecciones de 2009.

1.3 El tránsito de la democracia a la corrupción

Desde el gobierno de Roberto Suazo Córdova hasta los que presidieron Carlos Roberto Reina y Ricardo Maduro, se pueden observar intentos por modernizar el Estado y democratizar la sociedad. Al menos eso es lo que se desprende de la lectura de las diversas proclamas y discursos presidenciales y en algunas leyes aprobadas en el Congreso Nacional de aquellos momentos. Se aplicó una fraseología sobre el tema de la rendición de cuentas y de la necesidad de introducir códigos que regularan la actividad de los funcionarios públicos. Pero toda esa simulación de apertura no correspondía con la situación existente en la vida social. En los hechos se inmovilizaba al movimiento popular sea por vía de la cooptación de sus dirigentes o por medio de la represión y la corrupción de algunos de ellos. En la esfera del aparato estatal se profundizó el ejercicio de variadas prácticas corruptas hasta extenderse a

diferentes niveles de jerarquía de todo el sistema de gobierno, incluso, esa actividad se ha convertido en una real institución que mueve sus hilos en asuntos sencillos como la tramitación de documentos personales hasta algo mucho más sofisticado como la manipulación de las licitaciones y la adjudicación de contratos con el gobierno.

Todas las prácticas corruptas se han vuelto tan normales y funcionales que forman parte de la cultura del funcionario, sea civil o militar, hasta el grado que muchas de las pugnas entre los que encabezan las instituciones y con agentes privados pueden resolverse mediante el soborno, la extorsión y el pago bajo la mesa. Así, se aceleran los trámites, se abrevian los juicios, se agilizan las investigaciones policiales, se favorece a determinada empresa por medio de decretos de emergencia para evitar el lento procedimiento de la licitación y se efectúan compras directas de equipos y materiales para el gobierno.

Todo ello es el estilo acostumbrado en los gobiernos de la transición democrática, sin excepción. Y al parecer tal recorrido en post de una sociedad y un Estado más justo y democrático, iniciado alrededor de 1980, seguirá siendo muy largo y tortuoso tal y como se ha probado con el golpe de Estado de 2009.

Esta actividad ejercida desde el gobierno, desde todas las instituciones estatales y con la activa participación de empresas y actores particulares se volvió mucho más dinámica y macabra con nuevos sujetos que tienen el lugar perfecto para desarrollar e imponer nuevas formas de corrupción. Esa participación estelar le corresponde ahora al crimen organizado que penetra todo el sistema político, desde el gobierno sin dejar por fuera ninguno de sus componentes como a las instancias de dirección de los partidos políticos. En especial, dejan su innegable sello dentro del sistema judicial y de seguridad pública. Las últimas investigaciones realizadas desde el actual gobierno debido a las presiones externas y los simulacros que parecen encaminarse a la reforma de todo ese aparato, muestran que el crimen organizado está presente en varios niveles de la jerarquía policial, judicial y en el ministerio público.

Puede decirse que toda la existencia de la corrupción y sus secuelas no es algo que haya surgido de forma aislada, con vida propia e independiente de los intereses de los grupos políticos y económicos que han controlado a los partidos tradicionales. No hay separación entre la práctica partidaria en el gobierno con los intereses de los grupos dominantes. Muchos

de los dirigentes de esos partidos cuando son gobierno dicen con claridad que es su partido el que está en el poder y que hay que asumir ese poder con los miembros del partido. Eso garantiza que se controle toda la institucionalidad y el manejo del presupuesto nacional.

Es la garantía eficaz de que los organismos contralores de la actividad pública se encarguen de efectuar su labor dependiendo de las conveniencias del instituto político que esté en el poder. Por ello, se esmeran por mantener sus cuadros políticos más confiables en el poder legislativo, en el sistema judicial y en el sistema de control de la actividad gubernamental, sea negociando partes de esas entidades o controlándolas en su totalidad, ello va a depender del partido que esté de turno en el poder político y de los intereses de los grupos económicos que financian las campañas electorales. En todo eso que aquí se describe no hay ninguna novedad ya que ha sido la práctica corriente de los grupos políticos que han gobernado el país.

1.4 El golpe de Estado de 2009 o el atraco en grado superlativo

Una de las evidencias más nítidas del fracaso del proceso de democratización puede verse en la violencia convertida en un fenómeno que cruza todas las instituciones. Y la forma más acabada se expresa en el papel que se le otorga a la institución militar en donde se les confiere por disposición constitucional el ser garantes de la integridad territorial, del orden público, de todo el proceso electoral y, en general, de la ley fundamental y del sistema democrático. Se le da a los militares la defensa de las instituciones y tal acción puede hacerse con cualquier medio siempre y cuando se garantice y asegure el orden público. Los encargados de defender el sistema se denominan honorables patriotas, dignos caballeros que al culminar su carrera militar se convierten en la reserva democrática de la nación, necesaria, imprescindible y con los que se puede contar para desempeñarse con eficacia en los cargos públicos.

Todas esas virtudes, el honor, la dignidad, el patriotismo, no salen sobrando, son el antifaz que se utiliza en su disponibilidad al servicio de los grupos del poder económico y político y desde mucho antes de 1980 participan en la aplicación de las leyes que hacen posible el hambre, la miseria, la explotación del trabajo humano, los bajos salarios, la criminalización de la protesta social, la incultura, la desnutrición y el atraso material. Es decir, esa complicidad entre el poder político y el poder económico, el predominio de esos intereses sobre los intereses sociales, es lo que ha hecho posible que crezca y desarrolle la forma más completa y absoluta de la violencia como es la injusticia.

En sus cimientos se encuentra la violencia estructural provocada por las prácticas del mercado y el monopolio de la técnica y de la ciencia; y encuentra un fundamento ideológico, bastante racionalizado, en el derecho, la educación, la política, la religión y en el sistema normativo que regula las relaciones sociales. La necesidad de mantener inalterable toda esa compleja red hace posible la existencia de un sistema de seguridad y defensa operando como fuerzas de ocupación preparadas para enfrentar el enemigo interno y a la cultura que es considerada como peligrosa, hacen uso de tecnología y armamento para vigilar las actividades de las organizaciones populares y de los ciudadanos. Además, esa violencia legalizada genera ganancias extraordinarias y engrosan las cuentas bancarias de muchos funcionarios y empresarios privados

El golpe de Estado de 2009 mostró que, además de la participación directa de las Fuerzas Armadas que apartó a un lado su rol de garante de la institucionalidad, también se experimentó un gran esfuerzo legitimador de parte de dos poderes estatales en contubernio con los grupos oligárquicos para darle bases sólidas a esa ruptura. Tal labor fue la instigadora de más violencia y provocó también la introducción de unas artes y una sofistería lingüística para encubrir el hecho del golpe. Se habló de crisis, de sucesión constitucional y de otros artificios propios de acciones delictivas como ser la supuesta carta de renuncia de Manuel Zelaya. Toda esa cobertura cuasi legal, gramática y delincencial fueron utilizadas con la intención de poner cara amable a la violencia puesta en marcha en la madrugada del 28 de junio de 2009.

1.5 Las elecciones primarias

La comunidad nacional e internacional conoce muy bien que en Honduras existe una profunda crisis que abarca desde el ámbito económico hasta las relaciones ciudadanas. Tal situación se manifestó con mayor claridad a partir del golpe de Estado planificado y ejecutado por grupos financieros, religiosos y políticos que se han esforzado por mantener la situación de desamparo y pobreza que agobia a grandes sectores de la población nacional. Esa ruptura constitucional se convirtió en la circunstancia largamente esperada por el pueblo y por amplios sectores democráticos para expresar su rechazo frente a las viejas injusticias y desigualdades padecidas durante ese período republicano supuestamente democrático.

La represión y los asesinatos, no sirvieron para derrotar la lucha popular, por el contrario, profundizaron el grado de conciencia democrática y mejor organización para enfrentar la lucha, por provocar un quiebre en la historia política del país. Ello se vio fortalecido al constituirse el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el partido Libertad y Refundación (LIBRE) y otras organizaciones políticas como la Convergencia Refundacional (CR) y el Frente Amplio Político en Resistencia (FAPER), como aglutinadoras de las fuerzas progresistas y democráticas de Honduras.

Esta situación obligó a los grupos que detentan el poder político y económico a ceder posiciones y aceptar la participación del partido Libre en las elecciones primarias realizadas el 18 de noviembre de 2012. Los resultados de tal proceso han provocado sorpresas entre los representantes de la tradición política, como ser el partido Nacional y el partido Liberal. Hasta el grado de verse obligados a poner en marcha una compleja maquinaria para desvirtuar los resultados a través de viejas prácticas fraudulentas que van desde la falsificación de firmas, el doble voto, la alteración de actas de votación, el sabotaje electrónico y el ocultamiento de los datos del partido Libertad y Refundación. Han intentado hacer creer que todo obedeció a fallas tecnológicas y que el papel del Tribunal Supremo Electoral se limitó a la administración y a la supervisión del proceso con ayuda de observadores electorales de distintas nacionalidades.

El problema principal que enfrentan los grupos que quieren mantener sin cambios este sistema social injusto y excluyente, es la cantidad de votos a favor de LIBRE y de su candidata presidencial Xiomara Castro de Zelaya en estas elecciones primarias, que de hecho superó a los votos de los precandidatos de los partidos tradicionales y, además, esos votos son una manifestación del rechazo de grandes sectores del pueblo contra las prácticas fraudulentas en los procesos eleccionarios y expresan también, el rechazo frontal a este sistema social que ha marginado.

Los movimientos sociales y políticos surgidos a partir del 28 de junio de 2009 y el pueblo que en él se manifiesta, pretenden convertirse en una efectiva fuerza que propone la transformación del país y todo el sistema de leyes para forjar otra Honduras más respetada en donde se dignifique a la persona, sin exclusiones y en condiciones de mayor equidad.

II. Desajuste Económico: una causa no visible para el relevo del Gobierno en el bipartidismo hondureño.

Con la vuelta a la “democracia” en 1982, se pensó que quedaría en los expedientes del olvido el autoritarismo, impunidad y la corrupción que caracterizaron los 17 años de gobierno de facto bajo el mando de los militares. Muchos hondureños creyeron que las Fuerzas Armadas de Honduras se habían modernizado y que los actos de brutalidad contra el pueblo era práctica pasada. El golpe de Estado de junio de 2009, demostró que esta experiencia se había truncado pero que era cuestión de tiempo para volverle a dar continuidad.

Hasta antes del golpe del 2009, se realizaron en el país ocho (8) elecciones generales para elegir a constituyentes, presidentes, diputados y alcaldes. La primera de ellas, en 1980 para elegir constituyentes responsables de redactar una nueva Constitución, en esta ocasión el Partido Liberal obtuvo 495,779 votos, el Partido nacional con 423,623 votos y el Partido de Innovación y Unidad (PINU) con 35,052.

En 1981 se realizaron elecciones generales, siendo triunfador el Partido Liberal con 636,437 votos, seguido del Partido Nacional con 491,089, el PINU con 29,419 y por último un nuevo partido, Partido Demócrata Cristiano de Honduras, (PDCH) con 19,163 votos, lo que convirtió a Roberto Suazo Córdova en Presidente de la República.

En 1985 se realizan elecciones generales, de nuevo gana el Partido Liberal con 786,771 votos, en segundo lugar el Partido Nacional con 701,492 votos, luego el PDCH con 30,303 y por último el PINU con 23,721 votos, convirtiendo a José Simón Azcona Hoyo, Presidente de la República.

En las elecciones generales de 1989, gana el Partido Nacional con 917,168 votos, luego el Partido Liberal con 776,983 votos, el PINU con 33,952 votos y el PDCH con 25,453 votos, en 1990 asume la Presidencia de la República Rafael Leonardo Callejas.

En las elecciones generales realizadas en 1993, gana el Partido Liberal con 906,793 votos, seguido del Partido Nacional con 735,123 votos, el PINU con 48,471 votos y el PDCH con 20,350 votos, se elige Presidente de la República a Carlos Roberto Reina, quien asume en 1994.

Para 1997 de nuevo gana las elecciones el Partido Liberal que obtiene 1,040,403 votos, el Partido Nacional con 844,985, el PINU con 41,525 votos y el PDCH con 24,737 votos, el ingeniero Carlos Roberto Flores Facussé se convierte en Presidente de la República.

Para el 2001, triunfa el Partido Nacional con 1,137, 734, el Partido liberal obtuvo 964,590 votos, el PINU con 31,666, el nuevo partido Unificación Democrática (UD) con 24,102 y el PDCH con 21,089, para el 2002 asume la Presidencia de la República Ricardo Maduro Joest.

En el 2005, las elecciones generales las gana el Partido Liberal con 999,006, seguido del Partido Nacional con 925,243 votos, la UD con 29,754 votos, el PDCH con 27,8123 votos y el PINU con 20,093 votos, José Manuel Zelaya Rosales es elegido Presidente de la República.

En resumen y hasta el golpe de Estado, dos elecciones generales, en 1989, 2001 fueron ganadas por el Partido Nacional y cinco por el Partido Liberal (1981, 1985, 1993, 1997, 2005). Una especie de pacto político entre ambos partidos tradicionales, que se turnan el poder para el disfrute de sus cúpulas y funcionarios públicos y familias, ya que los resultados de la gestión no han sido de beneficio para la gran mayoría del pueblo hondureño.

La vuelta a la democracia en Honduras coincidió con un período de creciente inestabilidad y crisis económica y financiera, lo cual ha sido una constante en todo el proceso político electoral. Es decir que cada gobierno electo recibe de su antecesor una bomba de tiempo, referida al desequilibrio de las cuentas fiscales y deudas externas insostenibles que debilitan la gestión pública y al final termina por agravar la situación económica.

Las propuestas y planes de gobierno no se aplican, ya que en la práctica terminan desechándose por la magnitud de los problemas que se heredan de su antecesor, que implica la ejecución de políticas de ajuste donde el más afectado ha sido el pueblo, o sea quién los eligió. Este hecho, sumado a la ausencia de políticas económicas y sectoriales alternativas a la tradición, ha sido poco considerado en los análisis de los procesos políticos electorales en Honduras, sobre todo en la explicación del creciente abstencionismo.

2.1 Inestabilidad económica-financiera y autoritarismo democrático (1982-1989)

Existe evidencia que la gestión pública en este período no solo estuvo condicionada por la inestabilidad económica y financiera sino también por el creciente autoritarismo, reflejado en

el poder de los militares en las decisiones y políticas de seguridad interna, territorio, participación política y derechos de propiedad.

El crecimiento del PIB real en 1980 fue de 5.4% y el per cápita de 3,4%, pero en 1981 estos indicadores disminuyen (2.5% y -0.8% respectivamente). Más preocupante son las cifras de los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos. El déficit fiscal aumentó de 1.6 % del PIB a 7.2% y el de balanza comercial de 5.5% del PIB a 13.1%/PIB en 1981⁶. El primero afectó los precios, y el segundo demostró que nuestras exportaciones están sujetas a los cambios de precios en el mercado internacional y comportamiento de las economías de los principales socios comerciales, pero también por la rigidez de las importaciones que no se pueden sustituir en el corto e incluso mediano plazo.

La gestión del gobierno liberal de Roberto Suazo Córdova no fue la esperada, ya que gran parte de sus parciales habían sido marginados de los gobiernos de facto por la alianza evidente entre los militares y el Partido Nacional. Además de la entrega del país para servir de portaviones contra la revolución nicaragüense y grupos “insurgentes” en Guatemala y el Salvador, como también las crecientes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, que marcaron esa época. Las siguientes cifras económicas demuestran su ineficiente gestión económica: después de caer el PIB en 1982 y 1983, se observó un incremento anual de 3% en 1985 y del per cápita de 0.8%; sin embargo, el déficit fiscal global fue de 14.7%/PIB en 1985, igual el endeudamiento interno y externo observó una tendencia ascendente en todo el periodo (1982-1985) al alcanzar 24.0% y 64% del PIB en 1985. El desequilibrio externo (bienes y servicios) también mostró una tendencia desfavorable al pasar de 8.8% en 1982 a 10.0% en 1985.

Estas cifras más los crecientes controles de precios y problemas de acceso de la población a alimentos básicos, ya que la producción de granos cayó y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) enfrentó serios problemas para sostener los precios de garantía, presagiaban un panorama no muy alentador para el nuevo gobierno. El enfrentamiento de José Simón Azcona con el titular del poder ejecutivo y la opción electoral de permitir que al candidato del partido se le sumen los votos de los demás aspirantes, le permitió acceder al poder aun cuando no tenía claridad acerca de continuar o no con la política económica ejecutada por Suazo Córdova.

⁶ Cifras del Banco Central de Honduras

En la práctica el gobierno de Azcona fue una continuidad del anterior. En primer lugar se aferró a la política de no devaluación, permitió que los EEUU siguieran con sus prácticas desestabilizadoras en la región y fue evidente una continuidad de las violaciones de los derechos humanos. Una de las cartas de presentación del gobierno, fue la honestidad del presidente puesta a prueba por los pocos casos de corrupción hechos públicos en su gobierno, igual su deseo de cerrar el periodo con cifras alentadoras.

Los resultados de su política económica fueron mejores que su antecesor, pero cerró con fuertes desbalances fiscales y monetarios. La tasa de crecimiento (promedio) del PIB real para el período fue positiva de 3.9% y del per cápita también en los últimos tres años (1.6% anual promedio) frente a un decrecimiento en 1986 de -2.5%. Un elemento desestabilizador fue la inflación que aumentó de 4.4% en 1986 a 9.8 en 1989, explicado en parte por el sostenimiento del déficit fiscal arriba del 7% del PIB (promedio) alimentado por un acelerado endeudamiento externo que disminuyó en 1989 a 63% del PIB frente a 79.1%/PIB en 1986, por los problemas de pagos, bajos niveles de recaudación y distorsiones de precios (tipo de cambio principalmente) que ahuyentaron la inversión y a los OFIs.

2.2 El Ajuste Estructural: Punto de Quiebre de la Política Económica (1990-1993)

Un nuevo discurso político del “Cambio” para mejorar, y el agotamiento de un patrón de crecimiento económico y política de estabilización sustentada en endeudamiento, sobrevaluación cambiaria, control de precios e importaciones y aumento del crédito del Banco Central, facilitaron el triunfo del Partido Nacional y de su candidato Rafael Leonardo Callejas.⁷

El nuevo modelo era más de mercado, tal como lo fue la experiencia de países del Cono Sur (Chile después de 1973, Uruguay después de 1974 y la Argentina posterior a 1976). A diferencia de aquellas experiencias, la de Honduras se cataloga una experiencia no autoritaria por ser un presidente electo en votación directa y estar funcionando las instituciones democráticas.

⁷ El candidato del partido nacional, antes de las elecciones generales, recibió apoyo de un grupo de economistas liderados por Arnold Harberger de la Escuela de Chicago que fue traído a Honduras por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) con apoyo de la AID.

La Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (18-90 de marzo de 1990), la Ley y Programa de Reforma del Estado y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (decreto 31-92 de marzo de 1992), son la triada del monetarismo neoliberal en Honduras; complementado con políticas de compensación social para los pobres e indigentes como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), mientras la economía se estabiliza y el crecimiento económico se vuelve más robusto con mayor producción y empleos estables.

La primera ley elimina distorsiones en la tasa de cambio, aranceles, gravámenes y exoneraciones fiscales, ajusta el impuesto sobre la renta, ventas, producción y consumo, regula los subsidios al transporte y ajusta los pagos por servicios públicos. La segunda promueve la descentralización del estado y privatización de empresas públicas y servicios; la tercera elimina la reforma agraria tradicional, aprueba el fondo de tierras, legaliza la coinversión, colonato y aparcería, implementa la banda de precios para productos básicos, privatiza los servicios de asistencia técnica y extensión agrícola y otorga derechos de propiedad a los privados en la exploración de los recursos forestales y organiza la coordinación y dirección del sector agrícola.

La estabilización económica, el principal objetivo de política del gobierno de la República, no se logró tal como se había previsto. El déficit fiscal se mantuvo en un 7.1%/PIB como promedio del período que, en la tradición del enfoque monetarista, ejerció presión sobre los precios al observarse un tasa de inflación promedio (1990-1993) de 19.2%, con un pico de 34% en 1991. El endeudamiento externo continuó y se situó en un porcentaje alarmante en 1993, o sea 110.3% del PIB; también fue evidente un aumento del déficit en la balanza de bienes y servicios al representar el 15.6% del PIB en el último año de gobierno.

El aumento del PIB real (6,2%) y PIB per cápita (2.8) en 1983 tuvo su contraparte en estos fuertes desequilibrios (mayor déficit fiscal, inflación, endeudamiento y déficit en la balanza de bienes y servicios) que en teoría el ajuste económico debería estabilizar o disminuir. De nuevo, el gobierno entrante recibe una economía inestable siendo necesaria la profundización de las políticas de ajuste.

2.3 Cambio de Rumbo, Vulnerabilidad Territorial y Social (1994-2002)

El presidente Carlos Roberto Reina (1994-1997), propuso a la colectividad nacional el gobierno de la Revolución Moral, que en la práctica se traduce en combate de la corrupción y un código de ética del funcionario público, ya que a su antecesor se le acusaba de haber manejado la cosa pública con poca transparencia. Sin embargo, el gobierno también buscaba la ejecución de una política económica menos ortodoxa, aunque su principal asesor, Guillermo Bueso, era alto funcionario del Banco Atlántida

No obstante, la introducción de un mecanismo más transparente para ajustar la tasa de cambio con regulación programada del Banco Central, el aumento de la inflación fue una de las debilidades del programa económico, en tanto se mantuvo arriba de 20% como promedio anual del período (1994-1997), aunque disminuyó el déficit fiscal de 7.0% en 1994 a 2.9% en 1997. En este caso uno de los factores causales de la inflación lo fue el aumento de costos y la caída de la producción de granos básicos y la fuerte depreciación de la moneda en ciertos periodos del ciclo productivo.

En el sector externo, disminuyó el déficit de balanza de bienes y servicios de 16.4% a 10.6% en 1997; explicado por el aumento de las exportaciones de banano, café y camarones; igual la deuda externa pasó de representar el 117.6% a principios del gobierno a 86.9 al final, lo que demostró el esfuerzo realizado por renegociar las deudas con los acreedores y una política más productiva de endeudamiento. El PIB real y PIB per cápita mejoraron, ya que se cerró con tasas de 5.1% y 1.6% respectivamente.

El nuevo inquilino de la Casa de Gobierno, Carlos Flores Facussé, propuso a la colectividad nacional una Nueva Agenda, la cual se truncó por la tormenta tropical y huracán Mitch a finales del primer año de gobierno. La cooperación internacional creó un Grupo Consultivo que debería apoyar los esfuerzos del gobierno derivados del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN); base de una Estrategia más amplia denominada Estrategia para la Reducción de la pobreza (ERP).

Este fenómeno no esperado afectó los objetivos de la estabilización de la nueva agenda, pero fue evidente la reducción del ritmo inflacionario al caer la inflación de 12.7% en 1998 a 8.8% en 2001, no así el aumento del déficit fiscal de 1,173.8 millones de lempiras a 4,687.3 millones en 2001, un aumento de 299% y la deuda externa de 3,824.7 a 4,757.0 millones de dólares, o sea que aumentó en 24.3%. El huracán Mitch reactivó con más fuerza el activismo

de la política económica con mayor gasto (corriente y de inversión), lo que motivó a redefinir la política de endeudamiento y gasto público a finales de gobierno.

“En diciembre de 1999, Honduras fue declarado elegible para entrar a la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, siglas en inglés); posteriormente, en junio y julio del 2000, los Directorios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aprobaron el punto de decisión para nuestro país, como segunda etapa de la iniciativa HIPC. Al llegar al punto de culminación, el país podrá obtener un alivio nominal, en los próximos 15 años, de US\$960.0 millones en el servicio de su deuda externa, equivalentes a US\$556.0 millones a valor presente neto. Los recursos liberados del presupuesto nacional, serán destinados a programas sociales, incluidos en la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la cual ha sido formulada con el apoyo consensuado de la sociedad civil y en coordinación con el Banco Mundial, FMI y BID”.⁸

En el sector externo el déficit en la balanza de bienes y servicios se amplió, ya que de 635.3 millones de dólares en 1998 aumentó a 1,231.6 millones de dólares en 2001, o sea un aumento de 93.8%. Sin embargo, el gobierno cerró con un PIB real positivo (2.5%) pero insuficiente al observado en 1998 (2.9%); el PIB per cápita fue positivo pero raquítico ya que en 2001 se estimó en 1,121 mil lempiras, uno de los más bajos de la región.

El gobierno le apostó además a la inversión extranjera con la promulgación de una ley de minería que resultó dañina para el ambiente y la población, y otra de Concesiones de Obras Públicas, el llamado antecedente de COALIANZA la nueva modalidad de privatización de empresas, recursos y servicios públicos.

2.4 Nuevo Ajuste Económico para la Condonación y Combate de la Pobreza (2002-2005)

En el discurso del presidente Ricardo Maduro, se manifestaba un interés por continuar con el esfuerzo de más apertura de mercado, iniciado por el gobierno de 1990-1993, donde fungió como presidente del Banco Central. Sin embargo, la agenda diaria exigía estabilizar la economía para poder acceder a los recursos de la condonación de la deuda externa.

⁸ Ver Banco Central “Memoria Anual 2000”. Tegucigalpa, 2000.

Uno de los retos de la política económica fue reducir los indicadores de deuda externa para que fueran manejables, y poder así optar a la condonación de la misma al alcanzar el punto de culminación que se logró en marzo de 2005. En 1999 el saldo de la deuda/PIB era de 77.6% y bajó a 45.6% en 2005, igual bajó el saldo de la deuda/exportaciones de 184.9% a 77.3%, lo que demuestra el esfuerzo realizado. El servicio de la deuda/PIB también bajó de 3.8% a 1.8% y el Servicio de la deuda/exportaciones de 9.2% a 3.1% en el periodo de comparación.⁹

Estos resultados se acompañaron con mejoras en la tasa de crecimiento del PIB real y del PIB per cápita, que observaron tasas positivas en todo el período de gobierno aún cuando el agro hondureño, en especial el sector de la pequeña economía campesina, resistió la falta de crédito, asistencia técnica, semilla mejorada y sistemas de almacenamiento y comercialización. La tasa de crecimiento (promedio) del PIB fue de 5.1% y del PIB per cápita de 3%, donde el apoyo al sector exportador fue importante ya que, entre otras intervenciones, se diseñó una nueva política para el sector agroalimentario de mediano y largo plazo sobre la base del desarrollo de rubros con potencial productivo en regiones del país, promoviendo la organización de los productores en cadenas agroalimentarias e incluso de valor.

El gobierno hizo importantes esfuerzos por disminuir el déficit fiscal que se situó en 2.2% del PIB en 2005, frente a 3.9% del PIB, que ayudó en parte a que la inflación no se disparara arriba de un dígito (7.7% en 2005) pero arriba de la meta propuesta a inicios de gobierno (menor de 6% anual). No obstante, el desequilibrio externo en la balanza de bienes y servicios aumentó de 827 millones de dólares en 2002 a 1,726 millones en 2005, es decir, un aumento de 108.7%, donde el aumento de los precios del petróleo e insumos agrícolas fue uno de los factores determinantes.

Agregado a los problemas sociales generados por el ajuste de las tarifas y costos de los servicios públicos como la energía eléctrica, gasolina y pasajes, se agregó el problema de aumento de la pobreza en el marco de la ERP elaborada en abril de 2001. La pobreza extrema aumentó de 44.8% en 2002 a 47.1% en 2005, y la pobreza en general de 64.8% a 65.3% de la población hondureña.¹⁰

⁹ Ver para ampliación Javier Suazo “Las Condicionantes Económicas de la Crisis de Aseguramiento Social en Honduras”. Fundación Ebert. Tegucigalpa, Honduras, 2010.

¹⁰ Ver la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INE (2006).

2.5 Gobierno del Poder Ciudadano y Antesala al Golpe de Estado (2006-2008)

El gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, se denominó gobierno del Poder Ciudadano, en el entendido que la mayor parte de las intervenciones públicas deben contar con el apoyo y la participación de la población. En la toma de posesión el presidente sancionó una Ley de Participación Ciudadana, donde se establecían los mecanismos para garantizar dicha participación a distintos niveles de gobierno (local, municipal, departamental, regional).¹¹

Sumado a ello, el gobierno en el marco de la ERP, podía disponer de mayores recursos producto de la condonación de la deuda externa (dejar de cobrarle al Estado para que pueda invertirlos en el combate a la pobreza), entró en vigencia el CAFTA-RD para aumentar las exportaciones de bienes comercializables internacionalmente y atraer inversión extranjera para estimular la producción y el empleo, protegiendo aquellos productores de rubros sensibles como los granos básicos y carne principalmente.

Los resultados de las políticas económicas y sectoriales deben destacarse.¹² Entre 2006-2008, la tasa de crecimiento promedio del PIB real fue de 5.6% y del PIB per cápita de 3.6% (CEPAL; 2010). Sin embargo, hubo un aumento de la inflación de 5.3% en 2006 a 10.8% en 2008, como resultado de la crisis financiera internacional, aumento del precio de los alimentos y demás insumos agrícolas, fuerte incremento en el precio de los combustibles, aún cuando fue evidente el apoyo del gobierno al agro nacional con el financiamiento del plan de granos básicos, el bono tecnológico, bajas en las tasas de interés, fortalecimiento de BANHPROVI y BANADESA y el rescate de parte de la infraestructura agrícola.

De los dos desequilibrios fundamentales: fiscal y comercial, el gobierno pudo mantener controlado el déficit fiscal (2.5% del PIB en 2008) aunque en 2005 esta participación fue de 1.1%/PIB. No obstante, fue evidente el ensanchamiento del déficit comercial (balanza de bienes y servicios) al aumentar en 97.6% entre el periodo de análisis, o sea de 2,318 millones de dólares se pasó a 4,581 millones de dólares (CEPAL; 2010).

¹¹ Una de las condicionantes iniciales de esta propuesta, es que el presidente fue electo con un margen de votos no tan significativo que los obtenidos por el candidato del partido de Gobierno, que incluso adujo fraude en las elecciones y no reconoció de entrada a Manuel Zelaya Rosales como presidente de Honduras.

¹² El gobierno hizo público los logros de su gestión entre 2006 y 2008, para mostrar que las cifras eran mejores que aquellas presentadas por el gobierno anterior. Ver Informe de Logros del Poder Ejecutivo 2008. Ministerio de la presidencia, Febrero de 2008.

El gobierno enfrentó críticas de agencias cooperantes como la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi), que parte de los recursos destinados a la ERP fueron disminuidos y destinados a financiar el salario de policías y enfermeras, dejando a las regiones sin financiamiento para los proyectos de inversión real y en capital humano.¹³ Hay evidencia que la pobreza disminuyó por el aumento del PIB, mayor apoyo al agro y programas de desarrollo y compensación social a través de la Red Solidaria, según el INE los niveles de pobreza disminuyeron a 58.2%, aunque se argumentó también como factor causal, el ajuste en la metodología de medir la pobreza que favoreció esa reducción en el número de pobres.

El presidente de la República estableció vínculos con el presidente de Venezuela Hugo Chávez, y como resultado se firmó en enero de 2008, el Convenio de Cooperación Energética con Petrocaribe, a fin de mantener los precios estables de los combustibles; pero también se incorporó a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) para reducir la pobreza y desarrollar el sector agroalimentario.

Estas decisiones de política externa, afectaron las relaciones del gobierno con los agentes privados y grupos mediáticos que tradicionalmente se han enriquecido haciendo negocios con el Estado. Las intervenciones del gobierno incluyeron la promulgación del decreto 18-2008 para solucionar el problema de la mora agraria, el ajuste del salario mínimo arriba del 60%, el cambio de fórmula de importación de combustibles, la prohibición de la minería de cielo abierto, la reducción en la tasa de política monetaria (TPM), encaje y presión al sistema bancario para canalizar mayores recursos al agro.

A lo interno, el gobierno enfrentó además al Congreso de la República y demás instituciones como la Fiscalía, Procuraduría, Tribunal Electoral y Corte Suprema de Justicia que, en teoría, eran afines al partido de gobierno. La Cuarta Urna, una iniciativa de la presidencia de la República para consultar al pueblo (el soberano) sobre la elaboración de una nueva Constitución de la República a través de la convocatoria a una Constituyente, fue el detonante de estos conflictos internos y externos para violentar la Constitución de la República con el golpe de Estado al Ejecutivo.

¹³ Ver ¿Que pasó con la ERP? Instituto de Estudios Sociales (ISS)-Asdi, febrero de 2007.

III Golpe de Estado: condicionante del nuevo proceso político en Honduras.

Luego de las diferentes olas democratizadoras que tuvieron lugar en América Latina desde finales de los años 80s del siglo pasado, se fue asentando la idea en el mundo académico, político y en los demás espacios de la sociedad, que la democracia y la política volvían a ocupar el lugar perdido, después de los regímenes militares que asolaron el continente. La primera, como el sistema de gobierno en el que las mayorías nuevamente confiaban sobre todo, luego del derrumbe de los llamados “socialismos reales” que durante varias décadas pretendieron ser una alternativa al capitalismo, y la segunda, como aquella actividad ordenadora que no obstante su carácter diferenciador y confrontacional que mantuvo durante mucho tiempo, adquiriría nuevos contornos basados en principios distintos como el acuerdo, la concertación y el consenso.

En Centroamérica, los Procesos de Paz en los años 90s, pusieron fin a los conflictos armados, dieron paso a un ambiente de apertura para que nuevas fuerzas se incorporaran a la lucha política tanto en El Salvador como en Guatemala, Nicaragua, ya había iniciado ese proceso. Honduras en cambio, no obstante la ausencia de grupos o movimientos irregulares de importancia, jugó el papel de “portaviones” – tal el lenguaje de la época- desde el cual se combatía a los insurgentes en los países vecinos.

Los Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador, fueron el inicio de un proceso que paulatinamente fue superando el autoritarismo y la violencia que padeció la región por más de cuatro décadas, la reforma política sirvió para ir creando espacios de participación con el tránsito de dictaduras militares a regímenes democráticos que, en los primeros años, tuvieron que lidiar con fuertes enclaves -de poder que durante tanto tiempo condicionaron la vida de millones de centroamericanos.

Luego, se comenzó a hablar de la democracia como creadora de condiciones para la paz y el desarrollo, ello, en un entorno internacional que había dejado atrás la lógica de la guerra fría para dar paso a la instauración de gobiernos más o menos democráticos o que cumplieran formalmente, algunos de los requisitos para ser considerados como tales: procesos electorales periódicamente programados y cumplidos, con respeto y acatamiento de resultados.

En Honduras, con poca tradición democrática y mucho autoritarismo tanto por la propia cultura política como por períodos de gobiernos militares (1963-1970, 1972-1979) y una dictadura de más de diez y seis años (Tiburcio Carías 1933-1948), el sistema político fue reconstruido sobre la base de los dos partidos tradicionales el Liberal y Nacional, que durante los gobiernos militares fueron considerados como “cascarones vacíos” no solamente por su proscripción que duró mucho tiempo, sino, porque la mayoría de sus dirigentes y líderes con reconocimiento nacional, emergieron a la vida política a principios de los años 80s, con una visión del país que se asemejaba mucho a la que tuvieron a mediados y finales de los años sesenta, la última vez que participaron políticamente. Basta leer sus discursos, para darse cuenta de la concepción rudimentaria que tenían de la política y de los asuntos del Estado al que aspiraban gobernar.¹⁴

Durante los treinta años que han transcurridos desde que se inició el “proceso democrático”, la “transición” o “apertura democrática”, según el término que utilizemos, se consideró dentro de los estudios de casos y de política comparada, que el sistema político hondureño gozaba de mucha estabilidad basados en el respeto a los cronogramas electorales, al reconocimiento del resultado de los mismos, a la ausencia de golpes de Estado y niveles aceptables de participación electoral, lo que hacía suponer, que estábamos frente a una democracia que se consolidaba y que era legitimada por la población.

Sin embargo, esos estudios desconocieron las lógicas de los actores internos, la influencia de factores externos, la cultura política, la clase política hondureña y sobre todo, la consolidación paulatina de élites que posteriormente llegaron a convertirse en “colonizadoras” del Estado, instrumentalizaron a los partidos políticos para sus propios intereses y con ello, excluyeron a grupos y estamentos sociales subordinados, de los bienes y servicios que la sociedad produce convirtiendo al país, en uno de los más pobres e inequitativos del continente.

Este capítulo, tiene el propósito de auscultar las características del sistema político hondureño, para poder entender de mejor manera, las motivaciones que llevaron a las élites dominantes a dar el golpe de Estado de 2009 sin reparar en el retroceso que implica en términos políticos, económicos, sociales y humanos a corto y mediano plazo. Ello nos permitirá también, saber

¹⁴ Véase: Suazo Rubí, Sergio. *Auge y Crisis Ideológica del Partido Liberal. 100 años*. ALIN EDITORA, Tegucigalpa, 1991.

cómo el golpe de Estado, puede condicionar los posibles cambios en el sistema político y en la vida del país en general, sabemos que existen otras dimensiones, aquí, se abordan las que consideramos más atinentes.

3.1 El Sistema Político

Como se sabe, el sistema político en Honduras, comenzó a estructurarse a finales del siglo XIX, más concretamente, en 1891 cuando se crea formalmente el primer partido político que lo diferencia de las facciones o grupos políticos que existieron antes de esa fecha. En efecto, el 4 de febrero de ese año, se funda el Partido Liberal de Honduras con principios, estructura y liderazgo; con un origen que se podría llamar del “centro a la periferia”, es decir, desde grupos ilustrados hacia el pueblo o desde “arriba hacia abajo”.

En 1894, se redacta una Constitución que introduce elementos modernizadores a la vida del país dentro del Estado Liberal, entre ellos, las disposiciones para regular la política, sus instituciones y autoridades. No obstante, la forma en que dicha Constitución contemplaba el reconocimiento del ganador de una elección, casi siempre por lo menos hasta 1923, era motivo para que apareciera el disenso entre los perdedores, sobre todo, cuando se trataba de grupos o facciones de un mismo partido.

Dentro de las atribuciones del Poder Legislativo, se establecía que cuando un candidato no alcanzaba la mayoría absoluta de los sufragios, éste podía elegir las autoridades del Estado entre quienes hubieran obtenido el mayor número de votos, lo que a veces se hacía más por conveniencia política que atendiendo a la disposición constitucional, lo que daba lugar a que, quien se sintiera descontento, encontraba en ello la causa suficiente para la sublevación originando las llamadas “*montoneras*” o “*insurrecciones*” que traían la inestabilidad política¹⁵.

Entre 1902 y 1923, fue un período de gran inestabilidad política en parte, por lo mencionado anteriormente, pero también, por la intervención de dictadores de los países vecinos que apoyaban con armas y hombres a las facciones hondureñas. En 1923, se funda el Partido Nacional de Honduras y participa en las elecciones de ese año con Tiburcio Carías como

¹⁵ Marvin Barahona. *Honduras en el Siglo XX. Una Síntesis Histórica*. Editorial Guaymurás, Tegucigalpa, 2005, [29]

candidato, y derrota a los candidatos liberales pero el Congreso no le reconoce la victoria, éste se disuelve y estalla la guerra civil de 1924 que da origen a la intervención de Estados Unidos.

Para comprender mejor el proceso de “oligarquización” que el Estado experimenta desde hace algunas décadas, éste período de la historia política del país resulta fundamental por cuanto, es en las primeras tres décadas del siglo pasado, cuando se comienzan a conformar dos hechos que explicarían algunas de las características del sistema político hondureño, más allá de la existencia de los partidos políticos, su funcionamiento, los procesos electorales y sus mecanismos y de las instituciones que los regulan.

3.2 El Poder

Desde principios del siglo XX, el principal motivo de la violencia entre los grupos políticos “*era que el Estado se había constituido en la fuente principal de los recursos al alcance de los grupos de poder*”¹⁶, grupos que provenían de las principales actividades económicas de la época: terratenientes ligados a ciertos cultivos como el tabaco, otros, a la explotación minera, algunos a la ganadería y con el tiempo, no faltaron quienes pasaran a formar parte de los servicios profesionales y políticos que se le proporcionaban a las compañías transnacionales bananeras porque ambos partidos, “*servieron en sus orígenes a los intereses de las dos grandes compañías bananeras (Cuyamel Fruit y United Fruit Company)*”¹⁷.

Al tiempo, se comenzaba a configurar una forma de poder oligárquico al margen del Estado que, progresivamente, condicionaba la institucionalidad de los partidos y sus políticas de gobierno, al asumir éstas, el carácter clientelar que aún hoy conservan, de la mano de caudillos y jefes políticos rurales que eran quienes tenían la responsabilidad de llevar la campaña política y que, dependiendo del resultado, mantenían o no su vigencia local, regional o nacional. Con ello, la política adquirió un sello fuertemente personalista y los partidos, se convierten en organizaciones meramente formales y protocolares cuya existencia, era percibida con mayor fuerza, en época de campañas políticas pues sobre ellos, se erige el caudillo, figura que perdura hasta hoy en día.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Natalia Ajenjo Fresno, “El Sistema de Partidos Políticos en Honduras” en: *Las Ideas Políticas en Honduras. Tránsito del Siglo XX al XXI*, FOPRIDEH, Tegucigalpa, 2009.

El *poder*, aparece entonces, concebido no como un medio para llevar a cabo políticas de Estado y de gobierno encaminadas al bien común, por el contrario, “*ambos partidos...ha tenido a su disposición a los demagogos, los recursos del erario y los funcionarios expertos para resolver los problemas financieros sólo en beneficio propio...*”¹⁸. Esta concepción del poder que se ha mantenido en el tiempo, ha hecho que los partidos políticos vean al Estado como el espacio donde la autoridad pública se transforma en beneficios privados, que es en el fondo, el motivo de la lucha entre grupos y facciones por el poder; así, el Estado deja de ser “*una arena en que grupos y partidos compiten por políticas públicas diferentes o normas constitucionales*”. Luego, el poder se difumina hacia otros espacios que, aunque siempre hayan existido, su influencia en la vida política no era tan determinante, nos referimos al poder económico que como es ampliamente sabido, más allá de algunos casos puntuales como el “Enclave Bananero”, no ha tenido la capacidad de impulsar un modelo de desarrollo económico propio sin importar su orientación política; aún hoy, ello sigue siendo así como lo demuestra la propuesta de las llamadas “Ciudades Modelos” o “Regiones Económicas”, que son el reconocimiento máximo de esa incapacidad.

El modelo de construcción de ese poder económico, paradójicamente, no puede funcionar si no es teniendo al Estado como botín, porque la propia debilidad de los grupos económicos, les impide incluso, competir entre sí mismos para ser algo coherentes con el religioso mandamiento de la “libre competencia”, en una economía de “libre mercado”. De ese modo, se constituye al interior del sistema político, la malsana relación entre política, negocios y Estado esquema en el que, los partidos políticos, cumplen el papel de subordinados de los poderes fácticos.

Como se trata en el fondo, de la cooptación del Estado en beneficio de pequeños grupos devenidos en una especie de confederación de familias, cualquier intento que modifique las reglas establecidas por la lógica de la codicia, la explotación irracional de los recursos, el chantaje hacia el Estado y la hegemonía política que cada cuatro años burla las aspiraciones populares, tiene consecuencias. El golpe de Estado, es la más dramática de todas.

¹⁸ Rafael Heliodoro Valle, en: *Oscar Acosta, Rafael Heliodoro Valle Vida y Obra*. Instituto ITALO-LATINO AMERICANO, Roma, 1981.

A ésta forma oligárquica del poder, le faltaba algo: el velo divino de la religión. La moral religiosa en general, ha experimentado una transformación evidente cuando de asuntos políticos- es decir públicos- se trata, sobre todo antes, durante y después del golpe de Estado contra el ex presidente Zelaya. Se comenzó a hacer política desde los púlpitos y religión desde los estrados políticos, una especie de concubinato entre una visión integrista de la moral y la concepción medieval de la política. Las discusiones sobre el caso de la “píldora del día después”, son sólo un ejemplo claro, de cómo un pequeño grupo religioso-económico, tratando de imponer su visión sectaria, al resto de la sociedad en un asunto que es público, es decir de todos.

3.3 El bipartidismo.

Como se mencionó antes, hasta 1923 cuando ya existían formal y oficialmente dos partidos políticos con los principales elementos constitutivos de lo que se considera un partido, la política se expresaba por medio de grupos y facciones casi siempre alrededor de un caudillo, fenómeno que se siguió manifestando posteriormente aún dentro de los mismos partidos, como se puede ver en el hecho de que surgieran varios candidatos al interior de los mismos.

Resulta de suyo importante, conocer los orígenes del actual *sistema bipartidista* para comprender de mejor manera las lógicas actuales de los partidos tradicionales, en tanto que “operadores” de los poderes fácticos que se configuraron en Honduras primero alrededor de intereses extranjeros, y, después, con actores nacionales pero en una posición de subordinación a los primeros.

Lo que hoy conocemos como *bipartidismo*, algunos historiadores sitúan sus orígenes en 1925, cuando las élites de los dos partidos luego de la guerra civil de 1924, después que el Congreso Nacional no pudo elegir autoridades de entre los candidatos más votados en de las elecciones de 1923 ganadas por Tiburcio Carías Andino, sentaron un acuerdo sobre nuevas reglas políticas que implicaba entre otras cosas: la alternabilidad en el poder, respeto de los resultados electorales y traspaso pacífico del poder¹⁹, lo que se comenzó a cumplir a partir de la elección de 1928, y, el último intento de desconocer el acuerdo, fue en después de las elecciones de 1932, que gana Tiburcio Carías. El naciente bipartidismo, se encargó de sofocar cualquier forma de sublevación.

¹⁹ Marvin Barahona, op.cit.

Entre 1933 y 1948, se sucede el régimen de Carías- devenido en dictador- que prohíbe el funcionamiento de los partidos políticos y por tanto, deja en suspenso el acuerdo pactado en la década anterior, pero que ya había logrado una implantación social importante por parte de los partidos, debido a esa característica diferenciadora que tiene la política, al igual que otras esferas como la religión o la moral, en la que los individuos optan por determinadas opciones.

El *bipartidismo* puede ser visto al menos, desde tres perspectivas a saber:

a) como el acuerdo entre élites para conformar una especie de *sistema de reparto* desde el Estado en beneficio particular o de grupos, a través de actividades y funciones públicas que se desarrollan dentro del marco democrático en perjuicio del resto de la población. Pero como se trata de algo que rebasa en mucho los límites de los propios partidos políticos, en ésta faceta, el *bipartidismo* no tiene la capacidad para ser expresión sólo de actores políticos por lo que necesita de otros poderes que pueden ser el militar, económico y hasta religioso, como quedó de manifiesto en el golpe de Estado de 2009.

En 1957, se retoma la civilidad- si es que antes la hubo- y asume un gobierno surgido del sufragio universal, se reactiva el funcionamiento de los partidos pero ahora con un actor nuevo: las Fuerzas Armadas, con un rol protagónico en la vida política del país, puesto que, la Constitución de dicho año, le otorga el derecho y a las vez el *status* de garante del orden “constitucional” lo que en la práctica significa discrecionalidad para actuar o participar, no obstante su carácter “apolítico”, “obediente” y “no deliberante”.

Este hecho es clave para comprender que el *sistema de reparto* ya no puede actuar sólo, ahora el pacto iniciado treinta años atrás, se verá ampliado y compartido con una institución que los mismos partidos políticos convirtieron en depositaria del poder civil. Así, el *bipartidismo*, se ve sometido a unas reglas que no controla, y es obligado a otorgar prerrogativas al poder militar en la falsa creencia que dicho poder, en el futuro no intervendrá en política; el golpe de Estado de 1963 precisamente contra el gobierno y la Constitución que dan el carácter de permanente y profesionalizadas a las Fuerzas Armadas, confirman la apreciación anterior.

Cuando en 1982, se transita a un gobierno civil, el *bipartidismo* se ve enfrentado a una situación para lo que no estaba preparado: una especie de “tripolaridad del poder” conformado por el poder político representado en los partidos mismos, un poder militar y un poder

económico en forma de grupos corporativos ideologizados en la extrema derecha, la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) que arrastra también a ciertos grupos organizados dentro del ambiente de la guerra fría, y, bajo la hegemonía de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.

El *sistema de reparto* adquiriría de esa manera, unos contornos más sofisticados, pues la consolidación de nuevos poderes fácticos requería también de nuevas reglas, las que quedaron plasmadas en la Constitución de 1982, y de esa manera, la democracia no experimenta una “restauración” porque antes no existió- salvo en breves momentos históricos- lo que hubo entonces fue una “instauración”²⁰ dentro de un ambiente de guerras internas en los países vecinos, en el contexto del conflicto Este-Oeste.

Las élites dominantes, disfrazan de democracia lo que parece más un régimen con fuertes componentes autoritarios como la criminalización de cualquier oposición a la “democracia tutelada” o de “fachada” que ponen en marcha. Comienza luego, un proceso de apropiación de lo que ahora conocemos como la “oligarquización” del Estado”, incluyendo sus poderes e instituciones, para ser expoliado sin que importe la soberanía popular.

b) Por otra parte, *el bipartidismo* tiene una expresión político-ideológica que consiste entre otras cosas, en asumir la misma concepción liberal-conservadora de la democracia, en mantener el *statu quo* mediante aparentes reformas a las formalidades del sistema, en conservar los rasgos autoritarios de la cultura política hondureña (en la que sólo el 34% de los ciudadanos cumple con la ley, mientras entre los ricos, el porcentaje se eleva hasta el 76% para mencionar un componente fundamental de la cultura política de una sociedad), en la existencia de una clase política conservadora que no ha tendido la capacidad de renovarse y en el bajo nivel de institucionalización.

Dentro de su concepción ideológica, el *bipartidismo* considera que las reglas actuales que permiten el funcionamiento del sistema político, no pueden ser modificadas aunque ellas representen una especie de camisa de fuerza para que la sociedad pueda avanzar hacia otros estadios de bienestar, porque en esa concepción, los pobres no entran en su ámbito de consideraciones. El planteamiento de una nueva Constitución por medio de la convocatoria a

²⁰ Edelberto Torres Rivas, “Las Democracias Malas de Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica”. *Revista Nueva Sociedad*, Buenos Aires, No 226, 2010.

una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es la “bestia negra” del *bipartidismo* puesto que cuestiona y desnuda el *sistema de reparto*, modifica las reglas a partir de un nuevo pacto social y podría introducir modificaciones importantes al sistema político como los distritos electorales o la modificación de los artículos pétreos.

En el plano de las realizaciones, el *bipartidismo* ha sido incapaz de idear un “modelo” que mejore las grandes desigualdades sociales y los vergonzantes niveles de pobreza y extrema pobreza.

c) Desde luego, *el bipartidismo* tiene una expresión política-electoral alrededor de las instituciones de la democracia; los partidos políticos, el parlamento, las instituciones del Estado y los procesos electorales. Es en éste punto, donde el *bipartidismo* – como se entiende aquí- podría sufrir algunas modificaciones, como resultante de las consecuencias no deseadas y menos esperadas del golpe de Estado

En efecto, la irrupción de fuerzas políticas “nuevas” seguramente cambiará el sistema de partidos y la correlación de fuerzas en el parlamento, pero ésta posible modificación no sólo se explica por la existencia de otros partidos, también por factores como el agotamiento de los partidos tradicionales- más allá de su votación- por el descreimiento que de ellos tiene la población (apenas el 15% de la población cree en ellos²¹), por el nivel de abstencionismo electoral que ha ido creciendo en los últimos procesos electorales y por falta de capacidad para adaptarse a los cambios que experimentan las sociedades actuales

²¹ Latino barómetro, 2011.

Cuadro. N.1

PORCENTAJE DE ABSTENCIONISMO PRESIDENCIAL

Elecciones Generales	Abstencionismo Presidencial
1980	18%
1981	17.2%
1985	16%
1989	24%
1993	35%
1997	28%
2001	33.73%
2005	45%

Fuente: TSE

Sin embargo, debido a la tradición política, que se manifiesta en un gran porcentaje en un patrón de fidelidad, a las políticas clientelares, al caudillismo que suple las funciones que debían cumplir los liderazgos modernos y al conservadurismo de la sociedad hondureña y de su clase política, la implantación electoral y social del *bipartidismo* ronda casi el 90%, si nos atenemos al porcentaje electoral que logran los dos partidos tradicionales.

No obstante lo anterior, y en base a los resultados de las elecciones primarias del año anterior, es previsible que ocurra una importante dispersión del voto, pero también una reconfiguración de las fuerzas en el parlamento lo que podría llevar a impulsar cambios en el sistema político.

Por último, se puede agregar que más allá de los aspectos formales, el *bipartidismo* es un sistema de poder que presenta componentes oligárquicos y clientelares muy fuertes, carece de una ideología clara o por lo menos identificable en sus rasgos principales, ideológicamente se ubica en la derecha del espectro político (5.8% hasta un límite de 10 que representa la derecha) lo que facilita el entendimiento entre las élites que conforman un pequeño grupo cerrado, poco democrático y autoritario.

IV. La Economía y los Procesos Electorales Post Golpe

Los aspectos económicos son un factor determinante que explica el cambio (evolución o retroceso) de los procesos políticos. Entre otras razones, y para el caso particular de la experiencia hondureña, ello es más que evidente ya el país ha sido gobernado por grupos oligárquicos que, además de haber capturado al Estado, utilizan los partidos políticos como instrumentos para acceder al poder sin importar los resultados de los procesos electorales realizados cada cuatro años tal como lo ordenan las reglas establecidas.

4.1 Factores explicativos del porqué el golpe de Estado

Los análisis sobre las causas del golpe de Estado en Honduras enfatizan en los problemas jurídicos (violación de leyes)²² e institucionales como el irrespeto a las instituciones democráticas caso de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, y ausencia de las figuras de Tribunal Constitucional y Juicio Político.²³ Otros análisis lo atribuyen a la crisis política, pleito entre dirigentes de los Partidos y/o entre dueños.²⁴ Incluso se argumenta que el golpe de Estado se debe a la intransigencia del presidente Zelaya por llevar a cabo una aventura como la Cuarta Urna sin consenso previo.

Se observaron aspectos relacionados con el curso de acción de la política económica del gobierno de Zelaya Rosales, que a partir de 2008 empieza a distanciarse de la tradicional política de estabilización y ajuste económico recomendada por el FMI. Este distanciamiento ocurrió después de incumplirse el convenio con el FMI y el re quebramiento del gobierno de unidad liberal, al retirarse varios de sus principales ministros, como por ejemplo Gabriela Núñez del Banco Central.

No obstante, un análisis más detallado del Golpe de Estado, demuestra que sus causas se encuentran en el conflicto entre Zelaya y los grupos y agentes económicos que controlan la economía y medios de comunicación, y que actúan como principales proveedores del Estado hondureño. La llamada captura del Estado por estos grupos y poderes fácticos, ejerce una presión desmedida sobre la gestión pública del gobierno, principalmente en el diseño y

²² Véase para el caso, Boletín Especial (93) del CEDOH. Tegucigalpa, Honduras, 2009.

²³ Ver entre otros “Hallazgos y Recomendaciones”. Informe de Comisión de la Verdad. Tegucigalpa, Julio de 2011.

²⁴ Ver Álvaro Calix “Honduras: De la Crisis Política al Surgimiento de un Nuevo Actor Social”. Revista Nueva Sociedad 226, marzo-abril de 2010.

aprobación de leyes, proyectos y contratos de construcción y venta de productos, servicios e influencias.

Las principales acciones tomadas por el gobierno de Zelaya Rosales que afectaron las relaciones entre el gobierno y los intereses económicos y financieros de estos grupos, se sintetizan en seis puntos:

a) La prohibición de la minería de cielo abierto y el uso indiscriminado del cianuro que enfrentó, aunque en forma no visible, a las transnacionales mineras. En octubre de 2006, la ley de minería aprobado en el gobierno del presidente Flores Facussé (decreto N.139-98 de diciembre de 1998), en gran parte de su articulado fueron declarados nulos y sin efecto, pero era evidente que, al no aprobarse una nueva legislación alternativa, para detener este tipo de prácticas extractivas contaminantes, se dejó un espacio para que las compañías y socios internos conspiraran contra la prohibición hasta lograr en el gobierno de Lobo Sosa la aprobación de una nueva Ley de Minería con reformas "cosméticas".

b) La aprobación del Decreto 18-2008, que permite al Estado hondureño a través del Instituto Nacional Agrario (INA) titular las tierras de reforma agraria, es decir eliminar la mora agraria que se ha venido acumulando desde la década de los 70s. El problema surgió cuando el gobierno estableció en el decreto el pago de las mejoras (*indemnización *justi precio**) mayormente con bonos de la deuda agraria, aunque en la socialización del decreto se había establecido que el pago debería hacerse en efectivo.

El COHEP declaró el decreto inconstitucional y presentó varios recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, siendo congelado con el golpe de Estado y declarado inconstitucional por el gobierno de Lobo Sosa.

c) La nueva política energética para Honduras con una mayor regulación de las Compañías Transnacionales del petróleo. El gobierno de la República con apoyo de la Coalición Patriótica que lidera Juliette Handal, y asesoría del experto internacional Robert Meyeringh, inició un proceso de licitación internacional para permitir que otras empresas pudieran abastecer del producto en mejores condiciones de precio y pago. La licitación, al final fue declarada desierta porque el gobierno no pudo disponer de tanques de almacenamiento para que la compañía ganadora, CONOCO PHILLIPS, pudiera utilizarlos. Sin embargo, se modificó la fórmula de importación de combustibles (enero de 2007) que según el gobierno permitió un ahorro de 3 lempiras por galón de gasolina consumido, una pérdida para ellos

según las propias compañías de 600 millones de lempiras.²⁵ . Incluso se reguló la facturación a 90 grados Fahrenheit, para mejorar el rendimiento por galón a favor de los distribuidores y consumidores.

d) El ingreso de Honduras a la iniciativa PETROCARIBE del gobierno Venezolano, en enero de 2008, no fue bien visto por el COHEP, ya que argumentaron que era un convenio violatorio de los tratados comerciales como el CAFTA-RD y de los principios del libre mercado; no obstante, los beneficios para el país en ahorro de la factura petrolera, mejoramiento del flujo de caja y precios del galón al consumidor final.

e) El ingreso de Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) cuya declaratoria se hizo en agosto de 2008 y firma en octubre de ese año, también enfrentó al gobierno con los empresarios, prensa mediática e iglesia fundamentalista. Se argumentó que el Congreso de la República aprobó una adhesión de cooperación, no económica ni política; pero el Presidente no lo entendía así.

f) El ajuste del salario mínimo con base a la canasta básica de alimentos, y no en función de la tasa de inflación pasada incluso del aumento del PIB real, puso en alerta al sector privado y deterioró aun más la relación con el Ejecutivo, ya que el ajuste superó el 60%, muy por encima de la media regional y latinoamericana.

g) El activismo de la política monetaria, que se tradujo en cierta presión para que la Banca Privada liberara más recursos a favor de los sectores productivos. A juzgar por los pocos recursos destinados al agro nacional por ejemplo, la preocupación del gobierno se fundamentaba en la necesidad de aumentar la inversión, producción y el empleo, creando las condiciones para que además de los recursos propios la banca acompañara con sus fondos y estimulara sectores como el agroalimentario, forestal y la mediana y pequeña industria. Una de las principales políticas fue la reducción de la tasa de interés para créditos al sector agroalimentario, lo que enfrentó al gobierno con los dueños de los bancos.

h) El enfrentamiento con la Embajada Americana, en especial con el Embajador Charles Ford en temas como el narcotráfico, seguridad regional e interna, regulaciones de compañías extranjeras, política económica, etc.

²⁵ Ver Pronunciamento de COHPETROL, 18 de febrero de 2008)

4.2 Los Principales efectos e impactos económicos del Golpe de Estado

Los efectos e impactos del golpe de Estado en la economía del país han sido ampliamente documentados, ya que además se acompañaron por efectos colaterales provocados por la crisis financiera internacional. El PIB real cayó en -2.1% y el PIB per cápita en -4.1%.²⁶

En el sector externo, se observó una desaceleración en las exportaciones (7.3%), importaciones (203.3%) y de la inversión (14.3%), que se reflejó en una caída del déficit comercial en 1,748,8 millones de dólares, esto es un 40%. A lo interno y para enfrentar el problema de congelamiento de la ayuda externa, el régimen de facto se sobre endeudó internamente, ya que la deuda pública interna alcanzó un monto de 22.8 miles de millones en 2009, cuando a inicios del año era de 12.6 miles de millones de lempiras.²⁷

Las cifras de CEPAL (2009) dan cuenta de un estimado de 20,000 millones en pérdidas, o sea el 7.4% del PIB nacional, el COHEP reportó una pérdida de 150,000 empleos directos, más la caída en el comercio intra regional que arrojó pérdidas por más de 200 millones de lempiras.

Tal como ha sucedido en otros países (Chile por ejemplo), el golpe de Estado además de la violencia, represión y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y libertad de prensa, se acompaña de un retroceso en las “conquistas” ganadas por los sectores más necesitados de la colectividad nacional. Algunos de estos retrocesos se dieron incluso durante el gobierno de Zelaya Rosales, tal es el caso de la no concreción de la licitación internacional para importar combustibles y bajar su precio interno, derogación del decreto ejecutivo que autorizaba aplicar la norma de los 90 grados e incluso la prohibición de colocar la Cuarta Urna en las elecciones de noviembre de 2009.

El gobierno de facto tiró al cesto de la basura el convenio con PETROCARIBE y la adhesión al ALBA, por considerar no grato al Presidente Chávez de Venezuela, aunque el propio presidente Chávez lo suspendió ya que no reconocería a un gobierno golpista. Se elimina el decreto que autorizada ajustes en la importación de combustibles, la ley de participación ciudadana, se congela el decreto 18-2008 y se permite que las empresas generadoras de energía puedan incluso desarrollar proyectos en las áreas protegidas.

El régimen de facto, al borrar cualquier brote de populismo, y usar el endeudamiento interno para mantener al Estado funcionando, en especial la policía, el ejército y las instituciones

²⁶ Ver CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe”.2009.

²⁷ Ver para ampliación “Compendio de Análisis Nacionales”. PNUD, 2010.

públicas, buscaba su legitimación al garantizar además un proceso de elecciones transparentes que diera cuenta y justificará que lo concurrido en Honduras no fue un golpe de estado sino que una sucesión presidencial.

4.3 El Humanismo Cristiano: ¿Continuidad o Ruptura del Golpe?

Antes de las elecciones generales de noviembre de 2009, era evidente que el partido de gobierno (liberal) estaba “listo y servido”. A los problemas anteriores se sumaba la desintegración de sus bases y la ausencia de liderazgo. Lo de gobierno del humanismo cristiano por los líderes del Partido Nacional, en especial “Pepe Lobo” y Juan Orlando Hernández, fue una estrategia para no tomar (en teoría) partido entre las políticas de un gobierno, en realidad de un dirigente, de corte populista y otro de corte fascista.

No obstante, el programa de gobierno de Porfirio Lobo Sosa que ganó las elecciones por amplia mayoría, denominado “Agenda para el Cambio Ya” 2010-2014, se miraba como la continuidad de una consigna de los ex presidentes Callejas y Maduro, cuyo principal instrumento de política económica son los paquetazos y, por tanto, se ubica más cerca de la ideología neoliberal.

En su presentación, “Pepe” Lobo propone “un cambio que dignifique a la persona humana, procurando su desarrollo integral y sustentable, de modo que le permita gozar de una vida con calidad. Considera imperativo incrementar las oportunidades y capacidades de la población, ofrecerles garantías de seguridad para promover el desarrollo humano. Reitera el compromiso de gobernar para fortalecer la economía familiar de los más pobres, proteger a la clase media y promover la libertad empresarial, recuperando la confianza de los inversionistas y de la comunidad internacional. Desarrollará una plataforma económica que coloque al ser humano como el centro del desarrollo socioeconómico, fundamentada en una política económica responsable y consistente con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico que se vea reflejado en una disminución real de la pobreza.”²⁸

Aun cuando el gobierno integró a la chamba pública a dirigentes y miembros de los otros partidos que participaron en la contienda electoral, y se hizo un considerable esfuerzo por desmovilizar el conflicto político y social con el acuerdo de Cartagena al permitir el regreso al país del ex presidente Zelaya Rosales, acompañado del retorno a la OEA y el reconocimiento de la comunidad internacional, en la práctica el discurso fue abandonado.

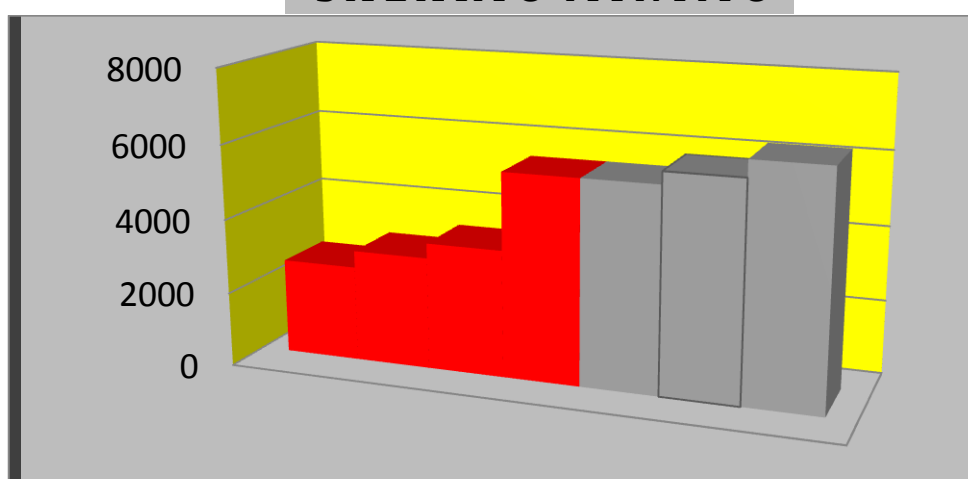
²⁸ Ver Agenda del Cambio Ya” 2010-2014. Tegucigalpa, noviembre de 2009, pág. 7

Se priorizó una política económica de corte monetarista neoliberal que terminó por afectar la producción, ingresos, empleo, salarios y nivel de vida de la población hondureña.

El gobierno de José Manuel Zelaya aumentó el salario mínimo en 114% en sus cuatro años, como compensación empresarial el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, no lo modificó en 2010, en sus tres años, Pepe Lobo ha incrementado el salario mínimo en 14.3%.

Cuadro. N.2

SALARIO MINIMO



2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2,571	3,025	3,428	5,500	5,500	5,836	6,286

Fuente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

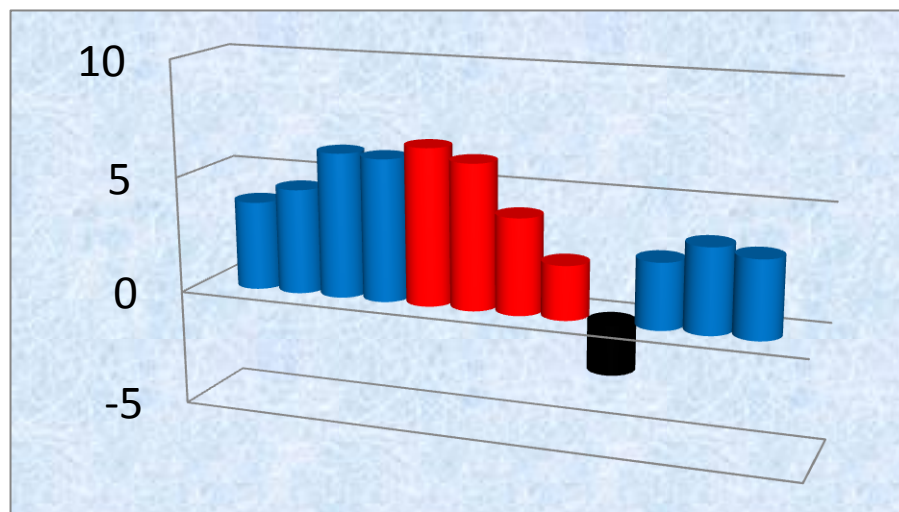
Asimismo, facilitó acelerar el proceso de privatización de los recursos naturales, las empresas y servicios públicos y la venta del territorio nacional, cuyo antecedente más inmediato es la corrupción, los altos costos para el erario público (endeudamiento a futuro) y la exclusión de amplios sectores poblaciones de los beneficios del desarrollo²⁹.

²⁹ Este hecho aún cuando el gobierno de la República conformó una Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), que debería orientar las intervenciones de los agentes económicos y sociales de tal forma que permita transitar en una senda de desarrollo económico y social, sin desigualdades y exclusiones manifiestas.

Los resultados de las malas políticas económicas aplicadas son evidentes, aunque se traten de ocultar o maquillar. La tasa de crecimiento promedio (2010-2012) del PIB real de 3.2% y del PIB per cápita en 1.2 %, se quedan cortos frente a más de 2 millones de desempleados, aumento de la pobreza, costo de la canasta mensual de alimentos y deterioro del salario mínimo real.

Cuadro N.3

CRECIMIENTO ECONOMICO REAL



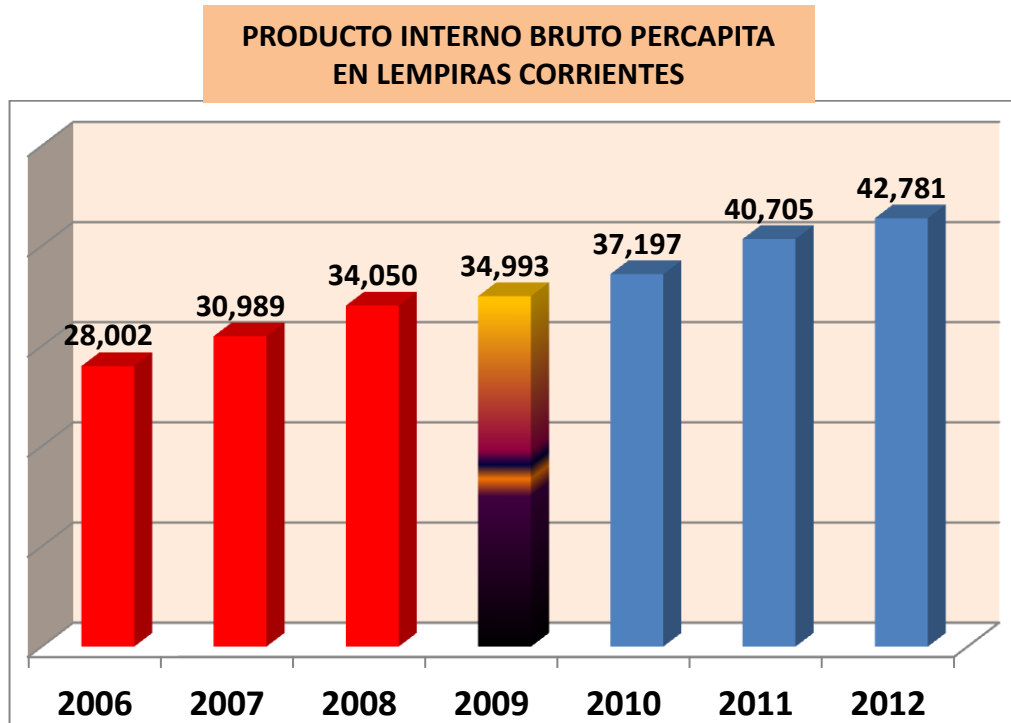
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	28jun/09	2009	2010	2011	2012
3,8	4,5	6,2	6,1	6,7	6,2	4,1	2,3	-2,1	2,8	3,6	3,3

Fuente: BCH

El Producto Interno Bruto Per Cápita (en Lempiras) del 2006 al 2009, creció 25% y del 2009 al 2012 aumentó en 15%, lo que demuestra el apoyo del gobierno de Zelaya Rosales a los sectores productivos, en especial al sector agroalimentario, aun cuando fue evidente un impacto negativo de la crisis financiera internacional en la inversión y exportaciones hondureñas. En el caso del gobierno de “Pepe Lobo”, destaca la influencia del aumento de los precios de café en el mercado internacional y de otros productos como el aceite de palma y

camarón; sin embargo, el agro ha resentido la falta de una política efectiva de apoyo financiero, particularmente a la pequeña economía familiar.

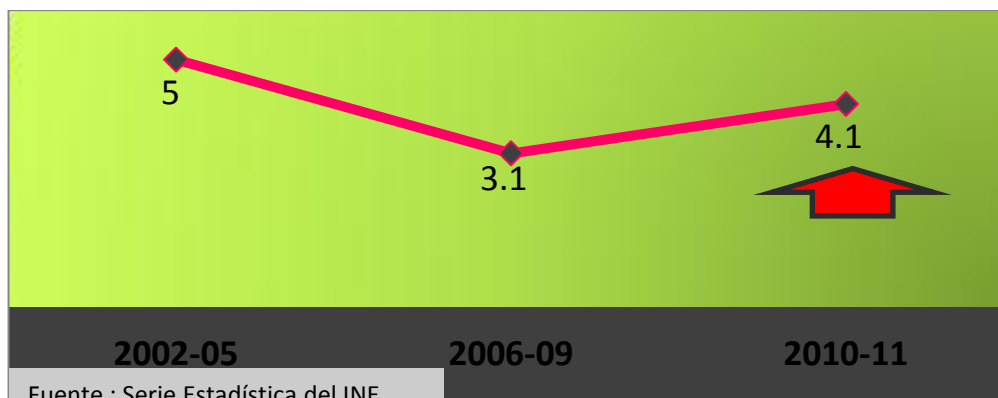
CuadroN.4



Fuente: BCH

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del desempleo promedio por período presidencial. Las cifras muestran que el desempleo será mayor a final del gobierno de “Lobo Sosa”, arriba del 5% (promedio) en enero de 2014.

Cuadro. 5
TASA DE DESEMPLEO PROMEDIO



“La brecha en balanza de pagos es preocupante, ya que frente a la caída de reservas monetarias por la devaluación e inestabilidad financiera combinado con un deterioro de la relación de intercambio, aumentó el déficit en la balanza de bienes y servicios y cuenta corriente. El saldo de la primera pasó de 2,989 millones de dólares en 2010 a 3,855 en 2012, o sea que en un período de tres años el déficit aumentó en 28.9%. En el caso del déficit en cuenta corriente, aumentó de 836 millones de dólares en 2010 a 1,623 en 2012, o sea 94.1%. (Ver CEPAL: 2012).³⁰

El endeudamiento externo y sobre todo interno en los últimos gobiernos, es el principal instrumento para saquear el Estado. Por un lado, destaca el aumento del gasto corriente, las prebendas a funcionarios y políticos del Congreso de la República que sustituyeron a SEFIN en el manejo del presupuesto, y la corrupción; por el otro, la contratación de empréstitos con la banca nacional para cubrir gastos y pagar deudas. Pero además, la justificación de una mayor deuda interna allana el camino para la privatización acelerada con COALIANZA y venta del territorio nacional, igual para contratar mayor deuda externa por ser menos “cara” que la deuda interna.

“El saldo de la deuda externa bruta total, según cifras de CEPAL, aumentó de 3,345 millones de dólares en 2009 a 4,452 millones en 2012; un incremento de 33%. La deuda interna es más preocupante, de junio de 2009 a junio de 2012, creció en 246%, el 73.3% tiene un

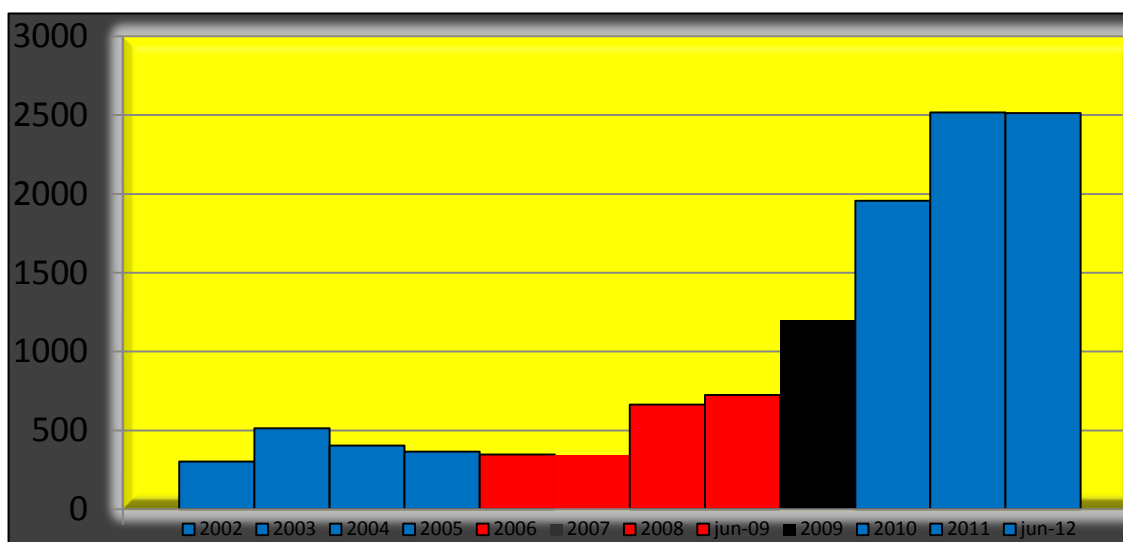
³⁰ Javier Suazo “ Tres Años de Gobierno del Humanismo Cristiano: ¿ Balance y Rectificaciones?. Inédito. Ciudad Universitaria. Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2013.

vencimiento entre uno y cinco años, en 2012 se estima en 58,000 millones de lempiras, un 34.4% del PIB.”³¹

Un baja captación de ingresos, combinada al aumento del gasto de capital y corriente, han ocasionado que el déficit fiscal sea de 6% del PIB, para el 2012, muy superior al presupuestado.

Los crecientes niveles de emisión de deuda interna (44% de la deuda total para 2012, representaba 33% en 2009) han saturado el mercado financiero doméstico y conducido a un alza en las tasas de interés, encareciendo el financiamiento público.

Cuadro N.6
DEUDA INTERNA
(Millones de dólares)



2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09	2009	2010	2011	jun-12
301,5	513,3	404,37	365,9	346,7	341	664,66	725,2	1,200,6	1,956,4	2,516,7	2,512,4

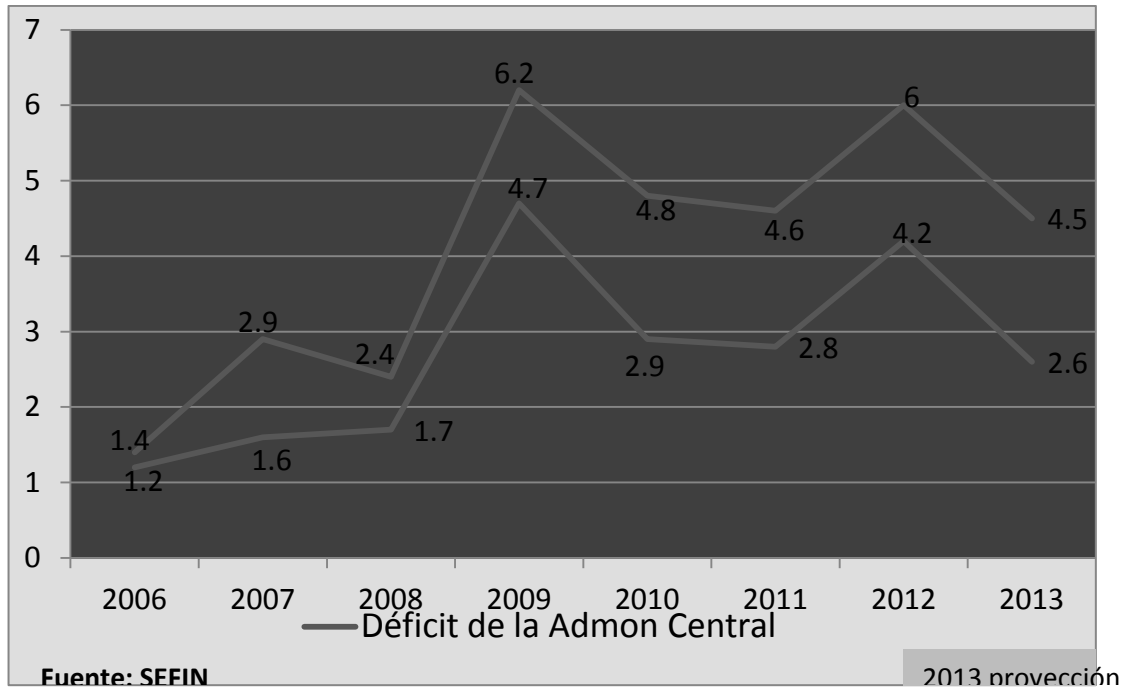
Fuente: SEFIN

La politización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), trajo como consecuencia la fuerte caída de la recaudación fiscal, aunado a la limitación del acceso a los recursos externos y al apoyo presupuestario que nunca llegó, por no llegar a un acuerdo con el FMI, condujo a un déficit fiscal muy elevado; ello aún cuando el presidente “Lobo” Sosa le apostó a una

³¹ Javier Suazo Tres años de Gobierno OP cit pág. 7

Comisión Interventora con técnicos de altos quilates pero caros, que terminó su período sin pena ni gloria, es decir sin mejoras sustanciales en las recaudaciones de impuestos y aumento del déficit fiscal en 2012 .

Cuadro N.7
DEFICIT FISCAL

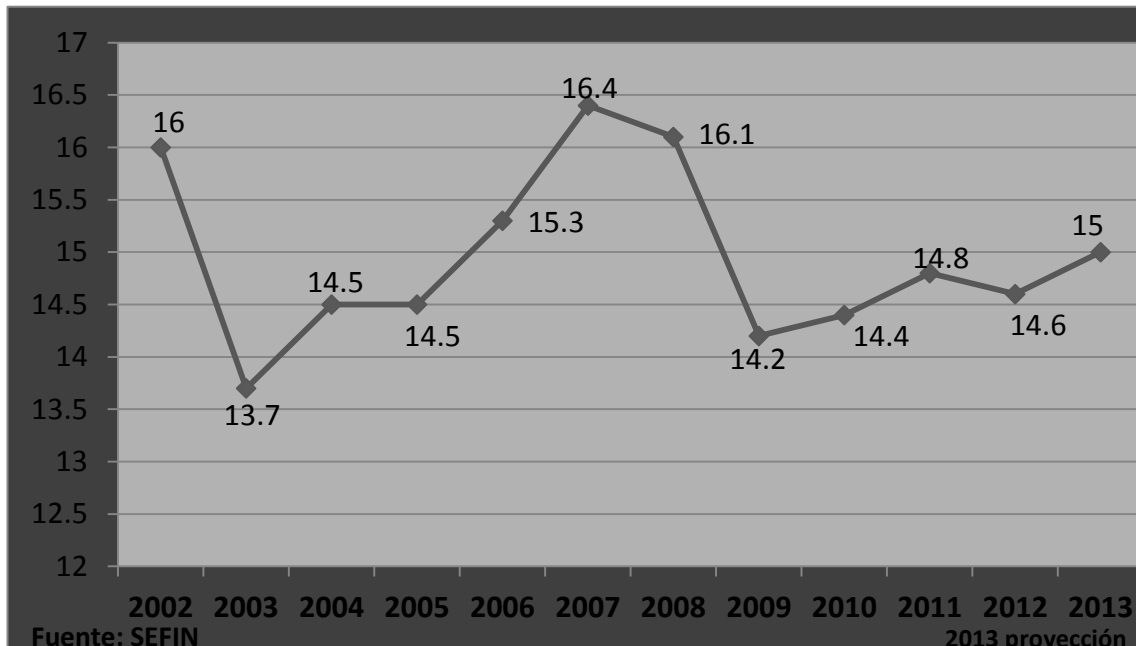


La presión tributaria o presión fiscal es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares deben aportar al Estado en concepto de impuestos. De ese modo, **la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos.**

La presión tributaria se mide según el pago efectivo de impuestos y no según el monto nominal que figura en las leyes, de tal modo que, a mayor evasión impositiva menor presión, aunque formalmente las tasas impositivas puedan ser altas. De hecho en países con alta tasa de evasión, el Estado usualmente eleva la presión impositiva sobre los habitantes con menos posibilidades de evasión, usualmente los consumidores. Uno de los vacíos de esta política es la poca recaudación por la vía de los impuestos directos, como el impuesto a la propiedad ociosa y mal explotada tal como ha existido en países de mayor desarrollo como Brasil. Un

impuesto de este tipo puede, entre otras cosas, aumentar los ingresos de Estado y motivar a los productores a mejorar la eficiencia de sus fincas, aumentando la productividad.³²

Cuadro N.8
PRESION TRIBUTARIA



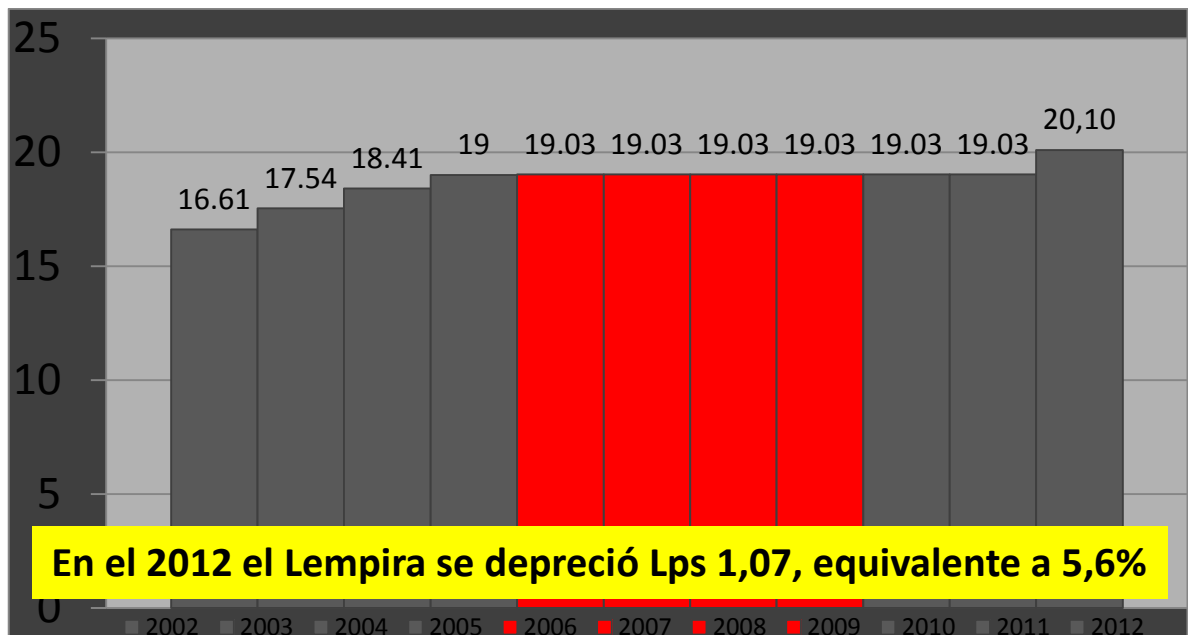
Cualquiera de los candidatos de los partidos emergentes debe pedir una evaluación del sobre/endeudamiento de la economía hondureña, no solo con la banca comercial sino también con la banca multilateral. Antes del golpe de Estado, gran parte de los fondos de la ERP se destinaron mayormente a gastos no tipificados como ERP, pero ¿Dónde fueron a parar más de 40,000 millones de lempiras de endeudamiento interno?, si se evidencia que la mayor parte de los indicadores económicos y sociales han empeorado después del golpe de Estado.

Es más, los nuevos endeudamientos que han surgido con los negocios de COALIANZA ¿A cuánto ascienden? ¿Cómo se pagarán? ¿Quién es el mayor beneficiario? ¿Por qué el gobierno hipotecó la carretera Tegucigalpa-SPS (CA-4) construida con fondos de préstamos y de la Cuenta del Milenio, si se considera un patrimonio nacional? ¿A cuánto asciende el sacrificio fiscal del Estado? ¿Por qué COALIANZA tiene reserva de información sobre sus proyectos, incluso violando las disposiciones del Instituto de Acceso a la Información y de SEFIN en materia de inversiones? ¿Será COALIANZA una nueva CONADI?.

³² Sobre este tema véase el trabajo de Javier Suazo HONDURAS: ¿30 Años de Política Agraria en Democracia?. ASODEICO-FIAN. Tegucigalpa, Honduras, 2012.

Antes de las elecciones internas, el debate sobre la política económica del humanismo cristiano brilló por su ausencia. Hasta el momento no existe una iniciativa para celebrar uno o varios foros con los candidatos a la presidencia de la República, acerca de cuáles son las medidas de política económica alternativas para superar la crisis actual, y como hará frente a los grandes desafíos que se avecinan: profundización de la crisis financiera internacional, alimentos más caros que agudizarán la dependencia alimentaria y el hambre, la insistencia del FMI por una devaluación acelerada,³³ el sobreendeudamiento interno, descapitalización y pérdidas cuasi fiscales en exceso³⁴ del BCH por lo errático de la política monetaria y cambiaria, la nueva ola de privatizaciones sin regulación por parte del Estado, la pérdida de la soberanía y patrimonio nacional; desempleo masivo; déficit crónico en vivienda social; aumento de la corrupción; inseguridad ciudadana y violencia sistémica; juicio político con dedicatoria; etc.

Cuadro N.9
DEPRECIACION DEL LEMPIRA



Fuente: BCH

³³ En la consulta del FMI al artículo IV se deja entrever que todavía el país tiene margen para seguir acelerando la depreciación de la moneda nacional. “Alentaron a las autoridades a hacer uso de la posibilidad de una mayor flexibilidad del tipo de cambio permitido por la banda de cambio actual”. Ver Informe en diario la Tribuna, del 16 de febrero de 2013, pág. 12

³⁴ El gobierno de la República contempla la emisión de más 11 mil millones de lempiras en bonos para cubrir dichas pérdidas a mediano plazo.

Esto es más que necesario de cara a la contienda electoral de noviembre de 2013, ya que después de más de 10 paquetazos por el gobierno y un creciente deterioro de las condiciones de vida de la población, donde por ejemplo, el “Bono Diez Mil” es insuficiente, pero utilizado políticamente por el candidato del partido de gobierno. Este, se presenta desde ahora como triunfador, no sólo porque su partido con ayuda del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) obtuvo más de un millón de votos superando incluso la elección general de 2009, sino porque todavía no se ha construido una verdadera oposición que responda a un discurso coherente y programa de gobierno creíble y con sustento popular.³⁵

En julio de 2012, el candidato nacionalista, anunció en el departamento de Choluteca que convertirá el programa “Bono Diez Mil” en Ley de País para que nadie le quite ese “beneficio” a los pobres e indigentes de Honduras; también anunció y presentó a JJ Rendón responsable de la conducción de la campaña política del movimiento Azules Unidos y de la eventual contienda en noviembre de 2013. “El nuevo integrante de la estrategia de campaña de Azules Unidos tiene un récord poco despreciable. De 22 campañas que ha orientado, solo ha perdido dos. Dados sus polémicos consejos cuando asesoró al PRI, la prensa mexicana lo definió como “el rey de la propaganda negra”, pero igualmente le reconoció “ser un profesional estricto y disciplinado”.³⁶

Recientemente y a propósito de la nueva Ley de Telecomunicaciones en discusión, que entre otros, socializará el acceso y uso del espectro radioelectrónico para la prensa independiente y comunitaria, destaca que JJ Rendón pueda estar detrás de la crítica y censura a los medios radiales y televisivos de Honduras. Frente a la situación de calamidad económica y social que enfrentará el país en 2013, la crítica de la prensa al gobierno es fundamental como instrumento para generar reflexión y planteamiento alternativo, pero si el interés del gobierno

³⁵ Contrario a los demás aspirantes a la presidencia de la República, el candidato por el Partido Nacional anunció que presentará a la opinión pública nacional el Plan de Gobierno 2014-2018 con base a 100 resultados medibles, donde seguramente se incluirán metas de inversión, exportación, producción, reducción de pobres e indigentes, beneficiarios del “Bono Diez Mil” y número de regiones económicas operando. Ha quedado demostrado que estas promesas de campaña se desvanecen ya en el poder, más aún cuando la magnitud de los desequilibrios fiscales y comerciales comprometen seriamente el futuro del desarrollo de Honduras.

³⁶ Ver la Tribuna OnLine, 29 de julio de 2012. Choluteca, Honduras.

es su silencio, lo que se buscaría es consolidar una dictadura mediática de cara a las elecciones generales.³⁷

V Análisis de los Resultados Obtenidos en el Proceso de Elecciones Internas 2012.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó la realización de las elecciones internas y primarias el 18 de noviembre de 2012, el día jueves 17 de mayo del mismo año, hizo el llamamiento a las autoridades de los Partidos Políticos para la inscripción de Movimientos Internos.

El Partido Nacional, inscribió seis movimientos o corrientes: “Azules Unidos”, cuyo candidato a la Presidencia de la República y Coordinador es el Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández Alvarado; “Salvemos Honduras”, candidato a la Presidencia de la República, Coordinador y Alcalde del Distrito Central Ricardo Antonio Álvarez Arias; “Miguel Presidente”, candidato a la Presidencia de la República y Coordinador, ex ministro de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte y ex alcalde del Distrito Central Miguel Rodrigo Pastor Mejía; “Por Honduras” candidato a la Presidencia de la República, Coordinador y Secretario General del Registro Nacional de las Personas (RNP), Fernando Francisco Anduray Díaz; “Eva y Yo”, candidata a la Presidencia de la República y Coordinadora, Eva Celestina Fernández; “Por Una Nueva Honduras” candidata a la Presidencia de la República y Coordinadora, Lorely Concepción Hernández Rodríguez, “Acción”, candidato a la Presidencia de la República y Coordinador Víctor Hugo Barnica Alvarado.

El Partido Liberal, inscribió tres movimientos: “Villeda” candidato a la Presidencia de la República y Coordinador, Mauricio Villeda Bermúdez, hijo del ex presidente de la República Ramón Villeda Morales y “Yani Presidente” candidato a la Presidencia de la República, Coordinador, ex ministro de la Presidencia e hijo de Don Jaime Rosenthal Oliva, candidato por muchas ocasiones a la Presidencia de la República, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y

³⁷ Sobre las bondades de una nueva ley de Telecomunicaciones, en especial la propuesta elaborada por C-LIBRE, véase el ensayo de Gustavo Zelaya en Voselsoberano.com

“Full Toro Colorado” candidato a la Presidencia de la República, Coordinador y empresario, Esteban José Handal Pérez.

El Partido Libertad y Refundación inscribió cuatro movimientos: “Mel 28 de Junio” cuyo coordinador era Carlos Zelaya Rosales, ex diputado al Congreso Nacional y hermano del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, la “Fuerza de Refundación Popular (FRP)” coordinada por Juan Alberto Barahona Mejía, dirigente sindical de mucha trayectoria, Presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y Subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, el “Movimiento Resistencia Progresista (MRP)” coordinado por Rassel Tomé, ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y “Pueblo Organizado en Resistencia (POR)” coordinado por el empresario Mauricio Ramos. Los cuatro movimientos postularon por consenso, como su candidata presidencial a Iris Xiomara Castro Sarmiento, esposa del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales.

La utilización del TREP por parte del TSE, que ya había sido puesto en práctica en las cuestionadas elecciones generales de 2009, nuevamente provocó grandes dudas en algunas fuerzas políticas que participaron en las elecciones internas y primarias, lo mismo que, en organismos observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto así, que se ha planteado la necesidad de ser sustituido por otro sistema de transmisión de datos más confiable; que permita en cualquier momento del proceso, ser auditado informáticamente por los propios partidos políticos, organizaciones de la sociedad y organismos internacionales a pesar de las cantidades millonarias que se gastaron para su diseño y posterior ejecución. Antes de las elecciones, los comisionados del Tribunal Electoral manifestaban que el TREP era un sistema confiable, por lo que se garantizaba un proceso electoral transparente, siendo los aspirantes a cargo de elección sorprendidos con las inconsistencias y poca transparencia del sistema.

5.1 Resultados Electorales por Partido

En el nivel presidencial, los resultados electorales en términos porcentuales por partido político son los siguientes: El Partido Nacional alcanzó el 46.5%, el Partido Liberal con 29.3% y Libertad y Refundación el 24.2%.

En las primarias del 2008, el Partido Nacional obtuvo 654,434 votos, en el 2012 alcanza 982,437 votos válidos, es decir un crecimiento en términos absolutos de 328,003 votos, equivalente al 50% de incremento. En promedio, significa que los votantes del Partido Nacional, crecieron un 12.5% anual, aun cuando el crecimiento vegetativo de la población apenas es de 2.8% anual.

Según la encuesta de CID GALLUP Latinoamérica, realizada del 8 al 14 de enero de 2013, el 67% opinó que las elecciones internas fueron fraudulentas, incluso los simpatizantes del Partido Nacional con 53%. Solamente el 25% consideró que fueron honestas y 8% no sabe, lo que arroja un Índice de Honestidad negativo de 42%.

Cuadro N. 10

Resultados Electorales por Partidos Políticos en Elecciones Primarias

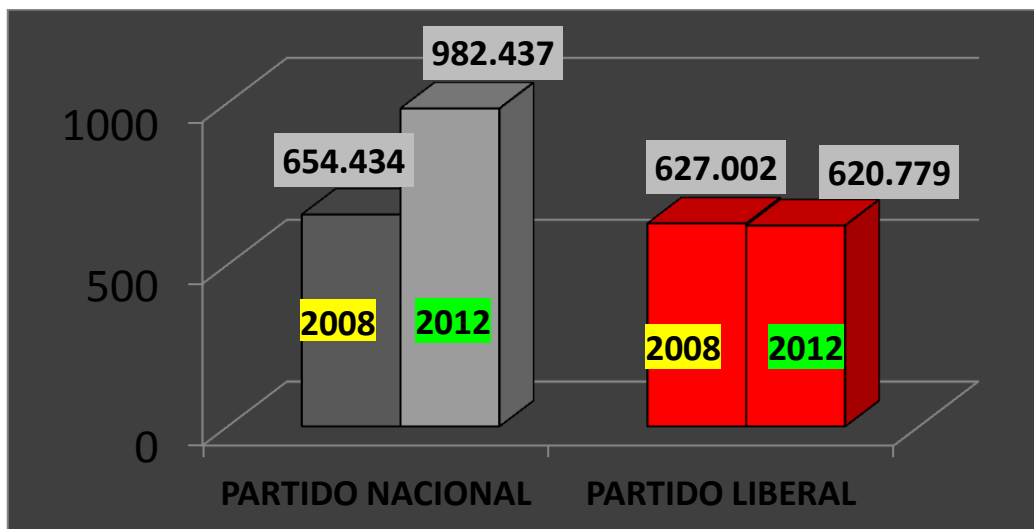
PARTIDOS	VOTOS VALIDOS	VOTOS NULOS	VOTOS BLANCOS	TOTAL
PARTIDO NACIONAL	982,432	79,924	82083	1,144,444
PARTIDO LIBERAL	620,779	39,056	59,748	719,583
PARTIDO LIBRE	563,162	5,631	25,699	594,492
TOTAL	2,166,378	124,611	167,530	2,458,519

Fuente: TSE

En cambio el Partido Liberal obtuvo en las primarias del 2008, 627,002 votos, en el 2012 alcanza los 620,779 votos, para un decrecimiento absoluto de 6,224 votos, equivalente al uno por ciento de disminución.

Cuadro N. 11

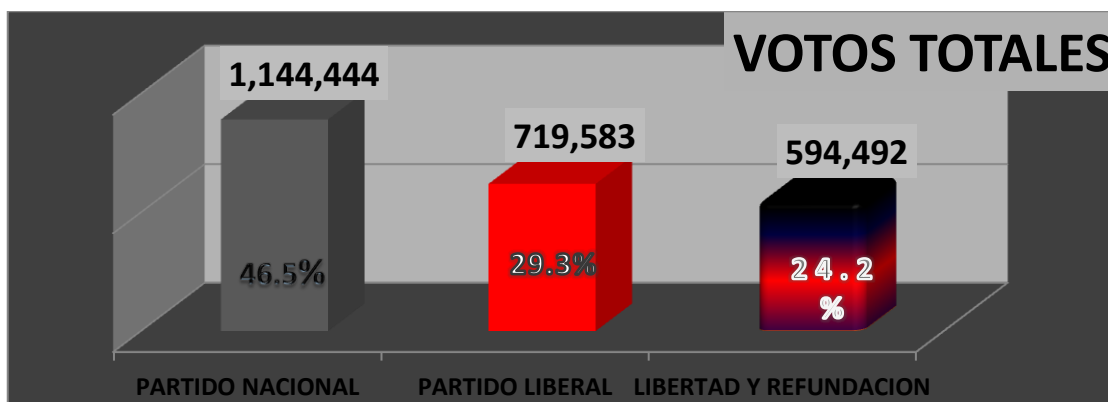
Comparativo de votos obtenidos en elecciones primarias



En las primarias del 2008, los dos partidos Nacional y Liberal obtuvieron 1,281.436 votos, contra los 1,603.,216 votos alcanzados en el 2012, un crecimiento de 25%, aun cuando aparece en la escena política un nuevo partido, Libertad y Refundación, que obtiene el 24.2% de los votos.

Cuadro N. 12

Resultados Obtenidos y Porcentajes por Partido en Elección Primaria



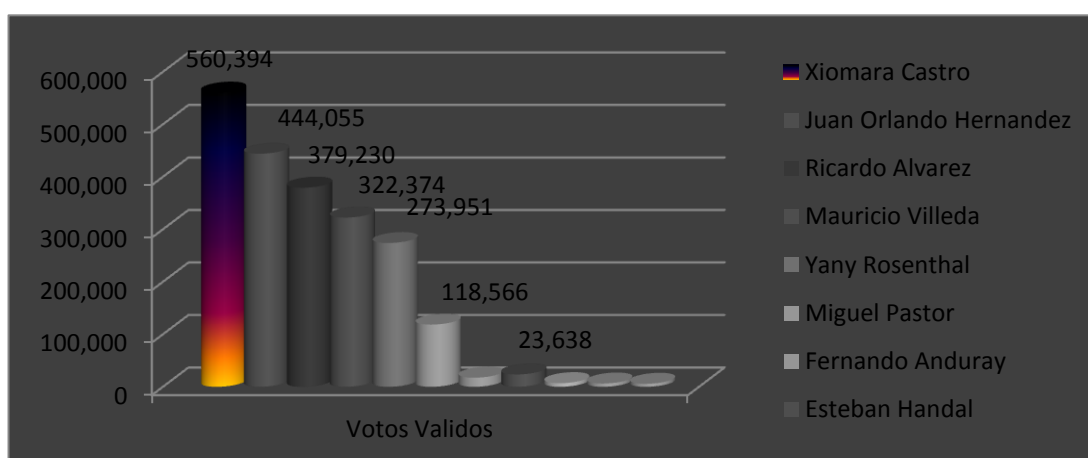
Fuente: TSE

5.2 Resultados Electorales en Nivel Presidencial

Con respecto a los votos individuales para presidente, por partido y movimiento, los resultados fueron los siguientes:

Cuadro N. 13

Resultados Obtenidos en el Nivel Presidencial, votos válidos



Fuente: TSE

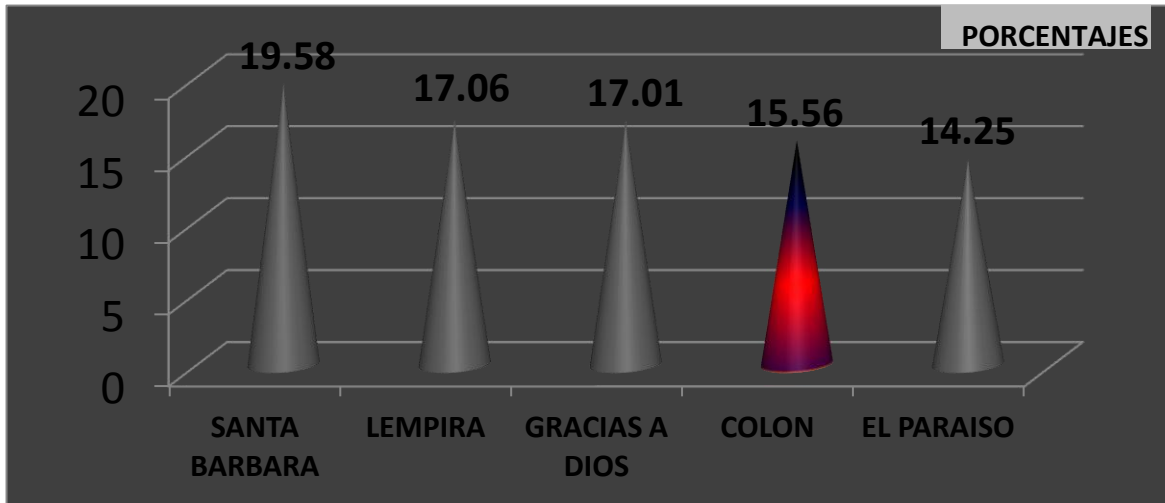
La gráfica muestra la base electoral con la que cuentan a nivel individual, tres de los principales candidatos que participaron en las elecciones generales del 2013. Estos datos indican el trabajo político, de organización y a nivel de propuesta que se requiere para poder llegar al mayor número de electores, de cara a una posible victoria electoral.

Para el caso, LIBRE, necesita aumentar su volumen de votos por urna, pasar de 74 que fue en la elección primaria, a un promedio de 100.

Existen otras variables que deben tomarse en cuenta para el trabajo de los partidos políticos y sus candidatos, por ejemplo aquellos departamentos con mayor afluencia electoral a nivel presidencial.

Cuadro N. 14

Departamentos con mayor afluencia electoral para Presidente



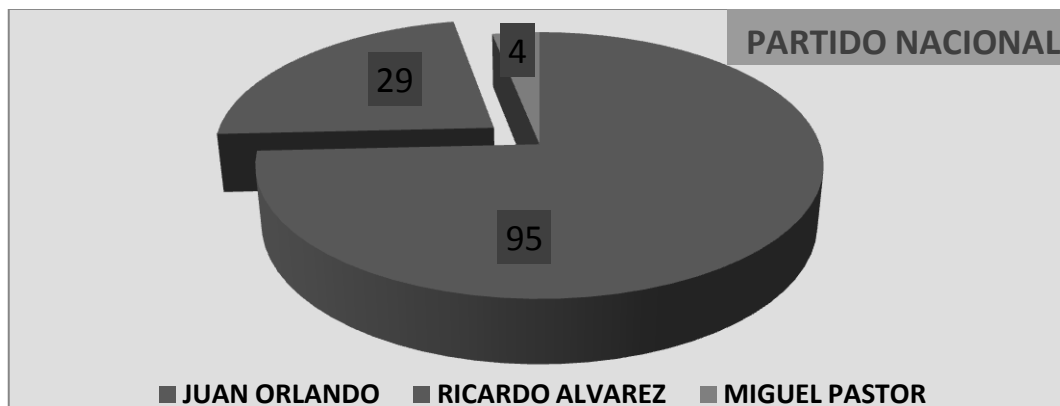
Fuente: TSE

5.3 Resultados Electorales en el nivel Legislativo

El número de candidatos a diputados por corriente de cada partido político arrojó los siguientes resultados. En el Partido Nacional, el movimiento de Juan Orlando Hernández obtiene 95 diputados, equivalente al 74.2%, el movimiento de Ricardo Álvarez, obtiene 29 diputados, equivalente al 22.6% y el movimiento de Miguel Pastor alcanza 4 diputados, equivalente al 3%, el resto de los movimientos internos no lograron ningún diputado.

Cuadro N. 15

Resultados Electorales para Diputados del Partido Nacional

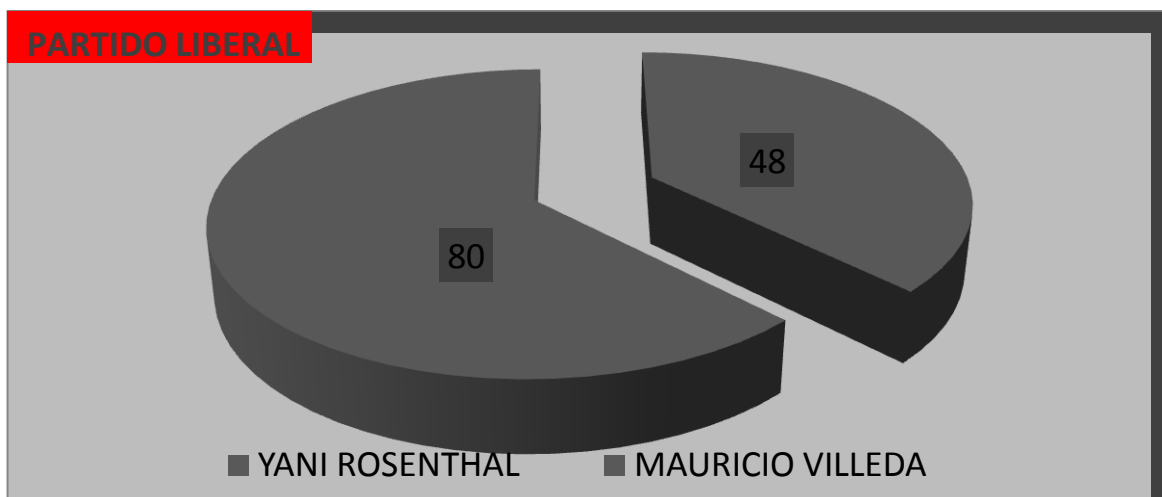


Fuente: TSE

En el Partido Liberal, los candidatos a diputados se repartieron así: movimiento de Mauricio Villeda, obtiene 80 diputados, equivalente al 62.5% y el movimiento de Yani Rosenthal elige 48 diputados, equivalente a 37.5%, el movimiento “Full Toro Colorado” no obtuvo diputados.

Cuadro N.16

Resultados Electorales para Diputados del Partido Liberal



Fuente: TSE

En el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se distribuyó los candidatos a diputados así: Movimiento “28 de Junio” 60 diputados, para un 46.9%, el “FRP” elige a 36 diputados, para un 28.1%, el “POR” obtiene 24 diputados, 18.7 puntos porcentuales y el “MRP” alcanza 8 diputados, equivalente al 6.3%.

Cuadro N. 17

Resultados Electorales para Diputados del Partido Libre



Fuente: TSE

Puede observarse que en LIBRE, la distribución de los candidatos a diputados es más equitativa entre cada movimiento interno. La mayoría de candidatos a diputados (60) fue alcanzada por el movimiento 28 de junio, considerada la corriente que más aglutina a los disidentes del partido liberal. La segunda fuerza, el FRP, denominada también la “fuerza alternativa” y que en teoría sustenta una concepción más cercana del socialismo democrático”, obtuvo 36 candidatos a diputados.

Al analizar, las marcas para candidatos a diputados y tomando como muestra representativa siete departamentos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro, se proyecta una relación de posibles diputados para el Congreso Nacional así: 53 diputados para el Partido Nacional, para un 41%; 38 para LIBRE equivalente a 30% y 37 para el Partido Liberal, un 29%.

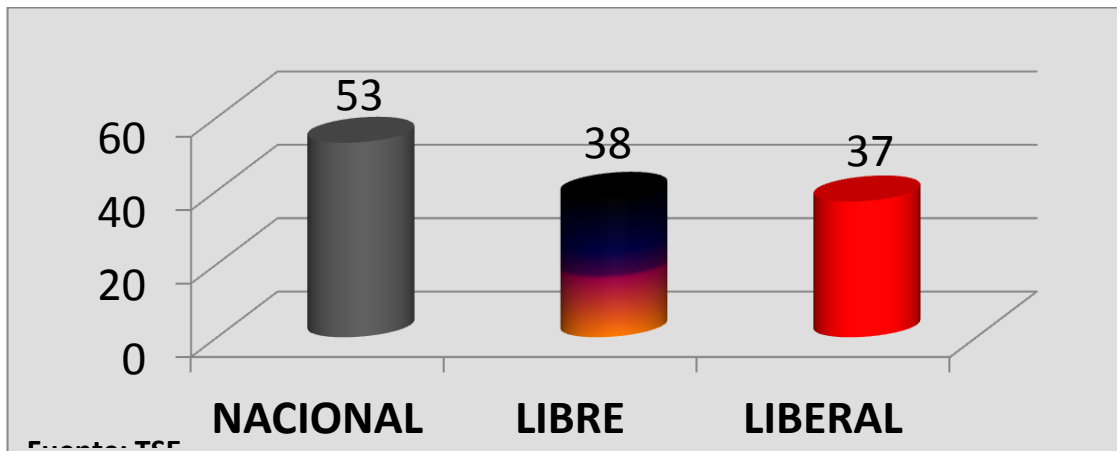
Cuadro N. 18

MUESTRA REPRESENTATIVA DE MARCAS PARA CANDIDATOS A DIPUTADOS

DEPARTAMENTO	MARCAS					DIPUTADOS POR PARTIDO POLITICO			No. DIPUTADOS
	TOTAL	LIBERAL	LIBRE	NACIONAL	COCIENTE	LIBERAL	LIBRE	NACIONAL	
FCO MORAZAN	5.864.285	1.309.890	1.898.024	2.656.371	254.969	5	8	10	23
CORTES	3.387.174	1.275.597	980.773	1.130.804	169.359	7	6	7	20
YORO	737.920	267.955	222.055	247.910	81.991	3	3	3	9
CHOLUTECA	646.820	223.604	136.599	286.617	71.868	3	2	4	9
OLANCHO	627.626	134.629	196.080	296.917	89.661	2	2	3	7
ATLANTIDA	527.300	149.256	138.707	239.337	65.913	2	2	4	8
COMAYAGUA	451.324	119.404	140.126	191.794	64.475	2	2	3	7
Fuente: TSE									

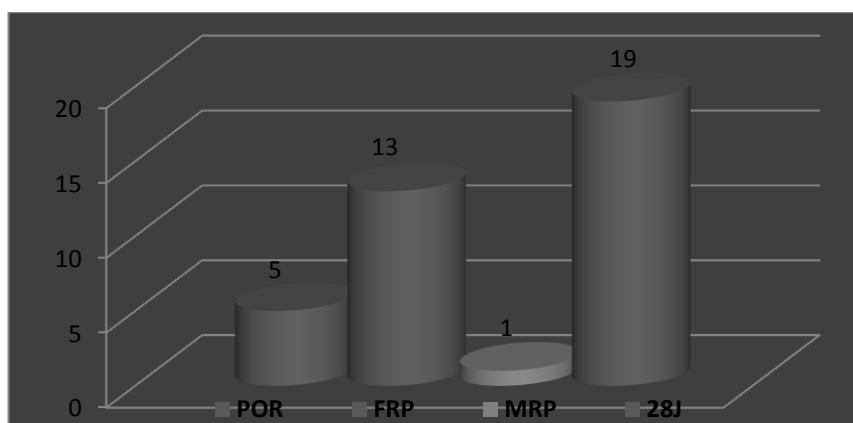
Es decir ningún partido podrá tomar decisiones, sin alianzas con otros partidos. Claro que deben tomarse en cuenta las circunstancias especiales de estas elecciones: la inflación del número de votos en los dos partidos tradicionales, la participación total de nueve partidos políticos, que logran por cociente electoral colocar a uno o más de un diputado, la compra de votos que tendrá un espectro más amplio y el 27% de indecisos. Este último porcentaje es importante, ya que deciden su voto el día de las elecciones y toman en cuenta las propuestas de los candidatos para solucionar los grandes problemas nacionales que son muchos.

Cuadro N. 19
PROYECCION DE DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL



Continuando con el mismo análisis, de los 38 diputados proyectados para Libre, se considera una distribución por corriente así: el “28 de Junio” con 19 diputados (50%), la “FRP” con 13 diputados (34.2%), el “POR” con 5 diputados (13.1%) y el “MRP” con un diputado (2.6%).

Cuadro N. 20
PROYECCION DE DIPUTADOS PARA LIBRE



Fuente: Elaboración propia con base a TSE

De los 38 diputados al Congreso Nacional, proyectados para LIBRE, solamente aparecen ocho mujeres, es decir el 21%. Este ha sido uno de los rezagos de la política hondureña, pero

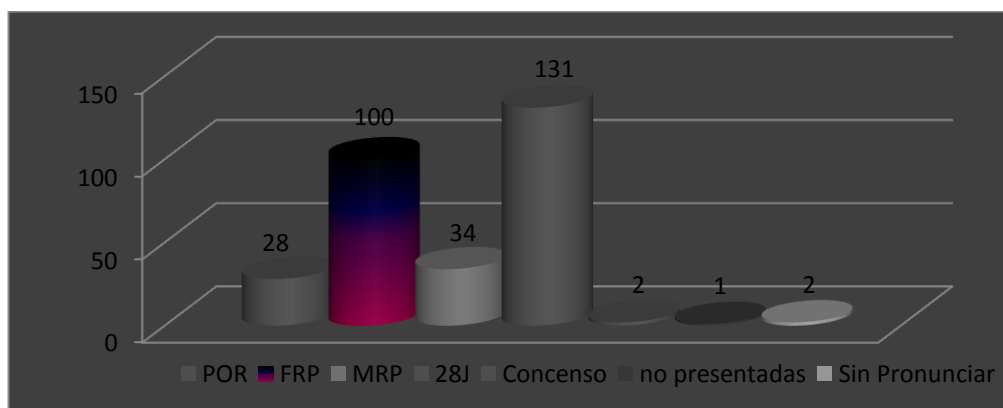
en el caso de LIBRE ello se debe a la falta de una estrategia de inclusión efectiva que reconozca que las mujeres tienen barreras de entrada, como la gran carga de trabajo que soportan, la violencia doméstica y la falta de “padrinos” políticos que les financian sus reuniones, no les permite participar en igualdad de condiciones en el proceso político. Se debe realizar un trabajo de motivación y mayor incidencia en la población, para que cada vez más, la mujer sea uno de los principales actores de las grandes transformaciones que demanda el país.

5.4 Resultados Electorales en el Nivel Municipal

En el nivel municipal los resultados por las corrientes de Libertad y Refundación son: el movimiento “28 de Junio” obtuvo 131 candidatos a alcaldes (44.7%) de un total de 293, la corriente “FRP” con 100 candidatos a alcaldes (34%), el “MRP” cuenta con 34 candidatos a alcaldes (11.6%) y el “POR” tiene 28 candidatos a alcaldes (9.5%). Se presentaron dos planillas por consenso, una donde Libre no presentó planilla y dos que el TSE no publicó en el Diario Oficial La Gaceta.

De los 293 candidatos a alcalde de LIBRE, solamente 43 fueron mujeres, equivalente a 14.7%, aun cuando el partido respetó el compromiso político de incluir el 50% de mujeres en todas las planillas a cargos de elección popular, tanto para diputados como para las alcaldías municipales.

Cuadro N. 21
MUNICIPALIDADES POR CORRIENTE DE LIBRE



Fuente: Elaboración propia con base a TSE

Una Hipótesis y Varias Razones sobre las Elecciones Generales 2013

Si se intenta ir un poco más allá del dato, de las comparaciones estadísticas, del resultado en las distintas elecciones nacionales y, sobre todo, de lo ocurrido en el proceso electoral de noviembre de 2012, no resulta complicado encontrar ciertos elementos característicos de la realidad política hondureña: el estilo tradicional del actuar político. Podemos ver, entonces, que a pesar del llamado “período democrático” inaugurado con la administración de Roberto Suazo Córdova y que se extiende por diferentes gobiernos hasta el golpe de Estado de 2009, muy pocas cosas han cambiado. Al grado de suponer que en nuestro país las aguas que corren bajo los puentes siempre son las mismas.

Toda la tradición política concentrada en los dos partidos representantes de los grupos del poder económico, muestra insistentemente que ninguno de ellos ha logrado su triunfo electoral gracias a una propuesta política de gobierno. Una propuesta que contenga políticas que tiendan a desarrollar y encauzar al país, en rutas claras de prosperidad en condiciones de igualdad, equidad y soberanía.

Todos los triunfos electorales de los partidos políticos tradicionales se han logrado alrededor de la figura del candidato, de la exageración de sus virtudes, que en la mayoría de los casos, son escasas, pero potenciadas con el auxilio de poderosos instrumentos de propaganda y el oportuno financiamiento de grupos económicos. Y si en algún momento se pretendió tener a mano un plan de gobierno coherente y una propuesta científicamente elaborada, rápidamente fue desechada una vez que el candidato asume el poder. Generalmente se diseñaban porque había que cumplir con un requisito publicitario o con alguna exigencia internacional. Después, las cosas se fueron haciendo según las ocurrencias del momento o por los vaivenes de la coyuntura. A ello se le puede agregar el hecho de las presiones externas, sobre todo económicas, por estar expuestos a los cambios económicos y políticos que ocurren en los centros internacionales de poder.

El desempeño de la actividad política desde el gobierno central se ha hecho partiendo de las exigencias de los grupos de poder internos y externos, y no porque se hayan seguido los lineamientos de alguna propuesta. Los ejemplos pueden rastrearse en la historia inmediata con el Plan Nacional de Desarrollo en los años comprendidos entre 1975 a 1979, que no fue más

que un hermoso documento que sólo sirvió para agrandar los archivos nacionales; se puede continuar con las consignas del “Cambio para mejorar”, la “Nueva Agenda” o la “Revolución Moral”, y ahora con el “Cambio Ya” y el “Plan de Nación-Visión de País”. Estas propuestas diseñadas para el consumo y para mostrar la faceta ordenada del gobierno, son hechas sin ninguna aplicación práctica, ni con resultados que indiquen, que estamos en el camino del desarrollo.

Después de la crisis desatada el 28 de junio de 2009, y, que, parece conducirnos a una fase de gran carestía, desempleo, inestabilidad social, criminalidad y aumento de la violencia institucional, estaríamos frente a un panorama de crisis, hasta el punto que cada vez más se habla ya no de ser un Estado y una sociedad degradada, sino en un acelerado tránsito hacia un Estado fallido; incluso, en un momento en donde ya se escuchan voces que ruegan porque desde el exterior se imponga una intervención y un rescate financiero, sin darse cuenta de las implicaciones que eso tendría para todo el país, pues sería el pueblo el que pagaría los costos del mismo.

Todos esos elementos de nuestra caótica realidad sugieren que es necesario, para cualquiera que aspire a dirigir el país, diseñar una propuesta de gobierno que haga posible organizar el desorden provocado por los partidos tradicionales desde sus diferentes gobiernos. Se trata de superar el descalabro, de ordenar las finanzas, de edificar un sistema social más justo, solidario, igualitario, equitativo, respetuoso de los Derechos Humanos y del ambiente, al cual se podrá llegar en un proceso que debe considerar la participación de los diversos sectores de la sociedad hondureña.

En cualquier propuesta de ese tipo, se tendrá que tomar en cuenta que no se trata del orden burocrático en el que piensan los formados bajo rígidos esquemas de pensamiento. Es la organización social que posibilite poner en el centro del desarrollo a la persona humana, diversa en sus exigencias y posibilidades, con todas sus necesidades materiales y espirituales, algo totalmente inconcebible bajo las condiciones del neoliberalismo y de la política tradicional, pero que desde otras perspectiva, deber ser claro en qué consiste, cómo se hace y con quiénes se hace, superando la expresión vaga de “con el pueblo”, cuando se sabe que ese concepto tan político, fue suplantado por el neoliberalismo por otros como “la gente”.

Del análisis realizado y sobre la base de los argumentos anteriores, aquí se esboza una hipótesis preliminar sobre el próximo proceso electoral.

Las elecciones generales serán ganadas por aquél candidato o candidata a la presidencia de la República que presente y defienda frente a la colectividad nacional una mejor propuesta de gobierno, capaz de enfrentar en forma planificada los grandes problemas de país, lo que motivará a participar del proceso electoral, en una forma más consciente, a una mayoría de la población.

Los procesos electorales han sido ganados tradicionalmente, no por las cualidades ni atributos del candidato o candidata, ni por los recursos de que se dispone sino, por la evidencia de una mala gestión del gobierno que lo precede reflejado en desempleo, hambre, impunidad, corrupción y violencia. La falta de una crítica de los partidos de “oposición” a las políticas de gobierno y demás intervenciones en perjuicio de la colectividad nacional, no es un factor fundamental para asumir que independientemente del mal gobierno se pueda ganar una elección presidencial, más aún si la evidencia demuestra un fuerte grado de insatisfacción por parte de la población con la gestión de un gobierno ineficiente y autoritario.

Las elecciones generales para las autoridades de país en sus niveles de presidente, diputados y alcaldes, previstas para el 27 de noviembre de 2013, pueden marcar un punto de inflexión o ruptura en el sistema político. Es una elección más consciente en una coyuntura económica, política y social desfavorable para seguir gobernando sobre la base de políticas excluyentes, rapaces, antidemocráticas y corruptas.

La participación de nuevas fuerzas políticas en el próximo proceso electoral, seguramente cambiará la actual configuración de poder en el Congreso Nacional, ello obligará a establecer una nueva forma de hacer política: las alianzas, alrededor de los grandes temas nacionales y no sobre intereses de grupos.

Por otro lado, es previsible que se produzca un fuerte condicionante del voto popular, debido a la gran cantidad de recursos económicos que el partido en el poder y su candidato, puedan disponer para enfrentar la campaña electoral. Seguramente, veremos la canalización de recursos a través de distintos programas sociales estatales pero con un fuerte componente

político, de la misma manera que recursos provenientes de otras actividades relacionadas con el Estado como el mismo “Bono Diez Mil”, las Computadoras Escolares, la Merienda Escolar, el Bono Productivo Solidario o los Eco-fogones. Es decir, la utilización de recursos del Estado, para influir o modificar la voluntad popular.

Aún cuando las últimas encuestas de opinión, ubican a la candidata de LIBRE con mayor intención de votos, es importante que elabore y presente una propuesta alternativa de país. Ya se empieza a visualizar el programa de gobierno de cada uno de los candidatos, Juan Orlando Hernández, propone un programa de “100 Metas” bajo el criterio de evaluación por resultados. Un enfoque que visto desde el pragmatismo, se asemeja al presentado por Piñera en Chile y Peña Nieto en México. La candidata Xiomara Castro del partido LIBRE, propone una Asamblea Nacional Constituyente para Refundar Honduras, pero necesitará de propuestas más concretas ya que los resultados de las elecciones primarias, sugieren que LIBRE, no tendrá mayoría simple en el próximo Congreso de la República³⁸. Por otro lado, Salvador Nasralla señala un programa de gobierno sustentado en la moral y la capacidad técnica de sus equipos.

Una propuesta alternativa para Honduras, debe sustentarse en un enfoque que privilegie políticas públicas orientadas a garantizar la reproducción material de la vida humana (empleo, alimentos, vivienda social y agua) y de la naturaleza, con servicios de salud y educación básica gratuitos para el pueblo: sobre la base de principios éticos. La última encuesta de CID GALLUP, muestra en febrero de 2010, que el 37% de la población hondureña consideraban que el crimen, violencia y narcotráfico era el principal problema de Honduras, en enero de 2013, el 48% considera que los problemas más apremiantes son la falta de comida (acceso a alimentos básicos) y el desempleo, superando el 5% que votó por la violencia, impunidad e incluso la corrupción. Se vuelve cada vez más necesario exigir a los candidatos que planteen cómo van a solucionar estos y otros problemas apremiantes (deuda mala, falta de tierras para producir, pérdida de soberanía y patrimonio nacional, violencia contra la mujer por ejemplo),

³⁸ Uno de los errores que pueda cometer la dirigencia de Libre es buscar la solución de los problemas económicos que enfrenta el país utilizando el instrumental del enfoque monetarista neoliberal; en realidad, la experiencia de países como Ecuador demuestra que el Socialismo Democrático tiene también sus propios enfoques de teoría económica e instrumentos alternativos.

ya que de lo contrario el discurso político será vacío y el programa de gobierno un engaño más.

Esta propuesta alternativa, debe ser distinta a aquella que sugiere un rescate financiero de la economía hondureña, que pareciera más una consigna de los seguidores fanáticos del FMI y que la repiten ONGs afines en Honduras, empresarios rapaces y diputados del Congreso Nacional, también debe ser distinta de los enfoques que ponen todo el énfasis en la parte fiscal de la economía, como expresión de una visión neoliberal ya fracasada.

Un programa de este tipo al estilo de los ejecutados en algunos países latinoamericanos, profundiza las políticas de ajuste económico recortando gastos sociales, bonificaciones, aumentado más impuestos y eliminadas de raíz conquistas de grupos de interés, pero que no resuelve el problema del sector real de la economía: falta de inversión, producción, empleo y alimentos para vivir.³⁹

Por último, hay quienes piensan que “las elecciones generales de 2013 se realizarán en una sociedad que se encuentra más polarizada que nunca. La polarización que mantuvo en vilo al país, al dividirnos en bandos extremos de “golpistas” y “anti-golpistas”, se reavivará con mayor furia entre quienes llamarán a votar para que el poder siga en manos del bipartidismo, y quienes llamarán a votar por un gobierno que se comprometa a convocar una nueva Asamblea Constituyente. Las tensiones entre ambos polos definirán no sólo el contenido de la campaña electoral, sino también la correlación de fuerzas entre los sectores favorables al estatus quo y los que promueven el cambio. ¿Y la gente? Las mayorías esperan un desenlace político que ayude al país a abandonar atajos y a encontrar el camino correcto y que ayude a la gente a transitar por los caminos de una vida más digna”.⁴⁰

³⁹ Ver sobre los rescates financieros: Marlén Sánchez Gutiérrez “El Rescate del FMI”. *CADTM*, diciembre de 2008.

⁴⁰ Ver a Ismael Moreno “Elecciones Primarias: Un Atajo Más. *Revista Envió*. No 369.